

Tony Daley y Jonas Pontusson

**El triunfo de la
izquierda en
Francia * 1**

• *Octubre de 1981*

La crisis de los setentas tuvo un efecto frustrante y desorganizador sobre las fuerzas progresistas de todo el mundo capitalista avanzado. La izquierda ha llegado a verse a sí misma enfrascada en una lucha cuesta arriba contra el desencadenamiento de un conservadurismo que se manifiesta en los triunfos electorales de los partidos de centro-derecha en casi todos los países de democracia liberal. Sus éxitos electorales permitieron a la derecha desafiar las premisas básicas del "arreglo posbélico" en Gran Bretaña, los Estados Unidos y otros países.² Aun allí donde la oleada conservadora no ha triunfado, una tendencia derechista parece haber dominado la política de los centristas y socialdemócratas.

La victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales y legislativas francesas de mayo y junio de 1981 desmiente las predicciones de una hegemonía derechista para la nueva década. Este triunfo es aún más significativo dada la falta de reconocimiento político concedido a la clase trabajadora por el Estado intervencionista en la Francia de la posguerra. Difícilmente podrían Reagan y Thatcher esperar conseguir mayor autonomía respecto de las presiones populares de la que caracterizó a la Quinta República con De Gaulle, Pompidou y Giscard. La respuesta del gobierno francés a la crisis económica de los setentas presagiaba los esfuerzos Reaganthatcherescos por echar la carga de la reestructuración económica de plano sobre los hombros de la clase trabajadora. Sin embargo, la estrategia fracasó cuando el electorado francés rechazó las prioridades gubernamentales y la antidemocrática naturaleza del proceso político. El ejemplo francés revela lo precario del apoyo popular al capitalismo autoritario, así como el poder de atracción potencial de la alternativa izquierdista. La victoria de Francois Mitterrand en la votación del 10 de mayo fue seguida por una victoria de la izquierda aún mayor en las elecciones legislativas del 14 y 21 de junio. De hecho, el 55.7

1* Agradecemos a Jeff Escoffier y Leslie Vaughan sus comentarios y ayuda editorial. T. D. y J. S.

2 Nuestra reflexión acerca del caso francés ha sido muy influida por la interesante discusión en Teresa Amort y Joel Krieger, "Thatcher and Reagan: State Theory and the 'Hypercapitalist' Regime", *New Political Science*, n.8

por ciento de los votos registrados en la primera votación por los partidos de izquierda representa el resultado electoral más elevado obtenido por una coalición de la clase trabajadora en la historia de las sociedades capitalistas occidentales.

La experiencia reformista inaugurada por el triunfo de la izquierda en Francia asumirá probablemente una vía más radical que la de la socialdemocracia en Europa del norte y central. Este gobierno socialista está dominado por un Partido Socialista (PS) que se considera a sí mismo socialista y no socialdemócrata. Este radicalizado PS parece haber aprendido sus lecciones de historia en las experiencias de los partidos socialdemócratas en el poder en Europa occidental. Se ha propuesto una gradual pero definitiva "ruptura con el capitalismo". Tenemos que definir a este gobierno como reformista, pero sus reformas son más extensas que las de otros "experimentos" similares. Por otra parte, la crisis económica ha reducido el margen de reformas, y la clase trabajadora se ha movilizó en torno al rechazó a los programas de austeridad. Estos dos factores casi imposibilitan la búsqueda de un "capitalismo con rostro humano". Además de una variedad de medidas redistributivas destinadas a mejorar la "situación de los menos privilegiados, el nuevo gobierno está ya poniendo en práctica un número sin precedentes de reformas estructurales que prometen alterar el equilibrio de las fuerzas de clase.

Pero el nuevo gobierno socialista enfrenta considerables obstáculos que evaluaremos en este ensayo. Primero analizaremos brevemente el desarrollo y desenlace del régimen gaullista. Sostendremos que el triunfo de la izquierda puede atribuirse en gran medida a un régimen atrapado por la lógica de sus políticas y los límites de su propia base de clase. Segundo, examinaremos la evolución de la política de la clase trabajadora de los setentas. Mientras el régimen gaullista se dedicó a suicidarse en medio de una crisis económica, las disputas faccionales y los combates intraclasistas caracterizaron a la izquierda durante casi toda la última década. Solamente una victoria electoral hizo posible la unidad de la izquierda. Tercero, describiremos las proyectadas reformas gubernamentales. El éxito de las reformas estructurales, como demostraremos, depende básicamente de la capacidad del gobierno para ofrecer una nueva visión, trascender la crisis y resanar las divisiones de la clase trabajadora. Finalmente, definiremos las perspectivas del socialismo francés. Argumentaremos que la necesidad de trascender la socialdemocracia es, al menos en parte, un reflejo del atraso histórico del desarrollo capitalista francés. Si bien las reformas socialistas prometen no

asemejarse a las soluciones socialdemócratas usadas en otros lugares, la ruptura con el capitalismo y la transición a una sociedad socialista no serán fáciles.

LA DEFUNCIÓN DEL RÉGIMEN GAULLISTA

El triunfo de la izquierda sólo puede ser plenamente apreciado en términos del carácter político del desarrollo capitalista en la Francia posbélica.³ En otros países de Europa occidental, la expansión del papel desempeñado por el Estado en la economía ha estado estrechamente vinculada al desarrollo de negociaciones tripartitas (involucrando a los obreros, los empresarios y el Estado) y otras formas de arreglos "corporativistas" que integran a las organizaciones de la clase trabajadora en el proceso político⁴ en Francia, por el contrario, la relación de los obreros con el Estado ha sido siempre distante y casi exclusivamente antagónica.

La exclusión política de la clase trabajadora es en Francia una tradición de larga data. El movimiento obrero tuvo previamente una posición central en el sistema político sólo muy brevemente durante el Frente Popular (1936-1937) e inmediatamente después de la segunda guerra mundial (1944-1947) : En ambos casos, el papel dominante de la clase trabajadora se apoyó en la precaria base de la unidad de la izquierda y la fragmentación de la derecha. y demostró ser muy vulnerable ante los sesgos de los acontecimientos políticos. Las reformas puestas en práctica por la izquierda en el primer periodo posbélico —nacionalización de ciertos bancos e industrias, mecanismos de control estatal de asignación de créditos y planeación a largo plazo— fueron de crucial importancia para el subsiguiente papel del Estado de promover la expansión y racionalización de la economía. Pero fracasaron en la tarea de institucionalizar las posiciones de poder de la clase trabajadora. Con el comienzo de la guerra fría, el Partido Comunista (PCF) fue excluido de todas las responsabilidades del gobierno, y la integración vino a servir como medio para dividir al movimiento obrero. Los comunistas conservaron el control de la principal confederación sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT). La integración parlamentaria de los socialistas bajo la

3 Partes de ésta y la siguiente sección se basan en formulaciones desarrolladas en Jonas Pontusson, "Apropos Mitterrand: State Power, Class Coalitions and Electoral Politics in Postwar France", *Kapitalistate*, n. 9 (1981), pp. 123-39.

4 Véase Leo Panitch, "The Development of Corporatism in Liberal Democracies", *Comparative Political Studies*, vol. 10, n. 1 (1977), pp. 61-90; y Panitch, "Trade Unions and the Capitalist State", *New Left Review*, n. 125, enero-febrero de 1981, pp. 21-43.

Cuarta República (1946-1958) cortó muchos de los lazos tradicionales del partido con la clase trabajadora.

La exclusión de la clase obrera del sistema político se hizo aún más pronunciada después del establecimiento de la Quinta República, en parte porque afectó a todos los componentes del movimiento obrero y no sólo a su contingente comunista. El Partido Socialista apoyó inicialmente al gobierno formado por De Gaulle para evitar un golpe militar en 1958. Al formar una coalición conservadora que incluía a todos menos a la extrema derecha, De Gaulle eliminó rápidamente la necesidad de hacer un sitio a los socialistas. Procedió a llevar a cabo reformas institucionales y políticas económicas que hicieron imposible para los socialistas acomodarse en el nuevo régimen. Al forzar a los socialistas a una oposición permanente y a una alianza de facto con los comunistas, el régimen gaullista dio el ímpetu principal a la (parcial) reunificación del movimiento de los trabajadores.⁵ El potencial desestabilizador de esta polarización derecha-izquierda fue compensado con medidas institucionales en la forma de un sistema de representación parlamentaria masivamente inclinada en contra de la izquierda y con la dominación ejecutiva del proceso gubernamental.

De Gaulle introdujo un sistema de representación parlamentaria basado en distritos de candidato único y de elecciones de desempate cuando ningún candidato obtenía la mayoría en la primera votación. Este sistema de todo-para-el-ganador fue diseñado para beneficiar al partido dominante de la derecha y para marginar a los comunistas. Tuvo un efecto devastador en la representación del electorado comunista en 1958 (con el 18.9 por ciento del voto popular, el PCF recibió ¡sólo 10 de 488 escaños de la Asamblea Nacional!) , pero los acuerdos entre los partidos de izquierda para retirarse en la segunda votación para favorecer a candidatos mejor colocados de otro partido redujeron posteriormente la disparidad de representación. Con todo, este sistema desalienta a las personas a votar por candidatos que no tienen muchas posibilidades de ganar, y las zonas rurales, de las que la derecha obtiene gran parte de su respaldo electoral, están sobre representadas en virtud del reparto de los distritos electorales. En las elecciones legislativas de 1978, por ejemplo, los partidos de izquierda combinados sumaron el 49.2 por ciento del voto popular, pero sólo recibieron el 40.5 por ciento de los

⁵ Para una discusión útil sobre el impacto de la Quinta República en la izquierda, véase Georges Lavan, "The Effects of Twenty Years of Gaullism on the Parties of the Left", en William G. Andrews y Stanley Hoffman, comps., *The Fifth Republic at Twenty*, State University of New York Press, Albany, 1981.

escaños en la Asamblea Nacional.

La influencia de los partidos de oposición se redujo aún más a causa del papel muy limitado desempeñado por el parlamento desde principios de los sesentas. Este giro en el locus del poder hacia el presidente, el gobierno y la burocracia fue sancionado por procedimientos constitucionales, pero fue posibilitado, sobre todo, por la formación de una mayoría parlamentaria directamente dependiente del presidente. El partido gaullista constituía la columna vertebral de esta mayoría. Su apoyo popular y su unidad interna dependían marcadamente del carisma personal de De Gaulle, el cual recibió un serio golpe con el levantamiento popular de mayo del 68. Al mismo tiempo, el espectro de revolución social evocado por los sucesos de mayo y el ascenso electoral de la izquierda en los setentas sirvieron para apuntalar el respaldo político al dominio ejecutivo. La hegemonía del partido gaullista fue desafiada con éxito por Valéry Giscard d'Estaing, líder del partido junior-partner de la coalición gobernante, en las elecciones presidenciales de 1974, y las relaciones entre los dos partidos de la derecha siguieron deteriorándose constantemente durante la presidencia de Giscard. Pero los parlamentarios gaullistas tenían pocas opciones a excepción de apoyar las iniciativas presidenciales, salvo que quisieran asumir la responsabilidad de precipitar una crisis del régimen.

El papel dominante del ejecutivo durante el régimen gaullista era respaldado también por una larga tradición de centralización administrativa, y por la existencia de un estrato elitista cohesivo dentro de la burocracia estatal. En ausencia de interferencias parlamentarias y de negociaciones corporativistas, este estrato elitista pudo asumir un papel clave en la formulación y puesta en práctica de políticas intervencionistas.⁶ El carácter burocrático de la actividad política y el aislamiento burocrático ante las presiones externas estaban estrechamente relacionados con la capacidad del Estado para intervenir selectivamente a fin de promover la reestructuración del capital.

La autonomía y determinación de la acción estatal, sin embargo, no deben ser exageradas. El intervencionismo estatal ha sido moldeado y restringido por las características estructurales de la economía capitalista, y también por las exigencias políticas que emanan de la composición de la coalición de clases dirigentes. Además, las agencias reguladoras del Ministerio de Industria han sido

⁶ La élite está organizada en cuerpos profesionales que apoyan la solidaridad corporativista y también representan un importante papel en el sistema promocional, sumamente competitivo, de la burocracia. El entrenamiento y autorreproducción de la élite burocrática es muy bien descrito por Ezra N. Suleiman, *Elites in French Society: The Politics of Survival*, Princeton University Press, 1978.

frecuentemente cooptadas, tanto como en los Estados Unidos, por los intereses comerciales sectoriales que supuestamente debían controlar, y las asociaciones de comercio han recuperado un importante papel mediador a este nivel. La capacidad del Estado para intervenir selectivamente a favor de empresas o sectores individuales deriva primordialmente de las oficinas centrales, vinculadas al Tesoro, que tienen una esfera de competencia intersectorial.

Si bien la planeación indicativa cumplió un importante objetivo político en los cincuentas y sesentas, los elaborados modelos econométricos del Plan nunca fueron suficientes. Las negociaciones informales entre burócratas y empresarios sobre objetivos de mercado muy específicos, y la manipulación selectiva por parte del Estado de los términos y corrientes del crédito en el sistema financiero, constituyeron los componentes cruciales del intervencionismo al estilo francés desde el comienzo mismo. Para finales de los sesentas, la planeación se había convertido en un inconveniente político al exponer públicamente la estrecha colaboración entre la gran empresa y el Estado. La dependencia del régimen respecto de los mucho menos transparentes mecanismos de intervención selectiva se hizo luego aún más pronunciada.⁷ Este modo de intervencionismo se basó en la exclusión política de la clase trabajadora en virtud del carácter privado y "técnico" de las decisiones implicadas. Los incentivos materiales para que la empresa colaborase con el Estado eran reforzados por el tipo de presiones que este último ejercía, emanadas de la burocracia más que de las fuerzas populares.

En contraste con otros países capitalistas avanzados de Europa occidental, el intervencionismo estatal en Francia nunca estuvo vinculado a ninguna clase de política fiscal. Por una parte, fue imposible poner en práctica tal política debido a la posición antagónica asignada al trabajo y la fragmentación política del movimiento obrero. La competencia entre las confederaciones sindicales demostró ser el principal escollo del único intento de negociar normas salariales para el sector público en 1970-1972. Por otra parte, la necesidad de una política de ingresos fue menos apremiante en Francia que en otras partes debido a la debilidad de la posición de la clase trabajadora en el mercado. El nivel de sindicalización ha oscilado entre 20 y 25 por ciento desde mediados de los sesentas, lo que

⁷ Con mucho, el mejor libro sobre planificación francesa es Stephen Cohen, *Modern Capitalist Planning: The French Model*, University of California Press, Berkeley, 1977. Sobre el sistema financiero francés y el carácter marcadamente selectivo del intervencionismo francés, véase John Zysman, *The State as Economic Player: Finance and the Politics of Industry*, University of California Press, Berkeley, de próxima aparición.

es comparable al de los Estados Unidos y notablemente más bajo que el de cualquiera de los principales países de Europa occidental. Esta debilidad refleja la fragmentación de los trabajadores, la tendencia antiobrera de la legislación sobre relaciones industriales, especialmente en el área de derechos sindicales en el puesto de trabajo, y la importancia del sector secundario, que descansa básicamente en la fuerza de trabajo proporcionada por trabajadores extranjeros temporales.

Tanto la debilidad tradicional como la exclusión política del movimiento obrero han sido un producto del retraso y desigualdad de la transformación capitalista en Francia. El campesinado y la pequeña burguesía urbana sobrevivieron al proceso de industrialización, y los límites entre la burguesía y la pequeña burguesía se vieron oscurecidos por la importancia del pequeño y mediano capital. Las relaciones de autoridad paternalista características de las pequeñas empresas constituyeron durante largo tiempo un obstáculo de primer orden a la sindicalización de la clase trabajadora. Esto explica en parte la continuada existencia de un considerable segmento de la clase trabajadora que no ha sido integrado en la vida organizativa del movimiento obrero. Este segmento se ha identificado tradicionalmente en términos ideológicos con la Iglesia católica.

Estos estratos tradicionales han proporcionado una base electoral de masas a las coaliciones conservadoras, y su visión del mundo se halla reflejada en los elementos autoritario-populistas de la ideología gaullista. Si bien eran legitimadas en esos términos, las políticas económicas y sociales del régimen gaullista estaban claramente diseñadas para promover los intereses de los sectores más avanzados del capital. Los estratos tradicionales estaban políticamente atrapados en la coalición gaullista. Se les engañaba parcialmente, pero también se les compraba. Al mismo tiempo que se usaba el control estatal del sistema financiero para canalizar el capital hacia los sectores orientados a la exportación, las pequeñas empresas y la agricultura seguían siendo defendidas de las presiones del mercado mediante protección de la competencia extranjera, controles de precios y subsidios directos.⁸ La clase trabajadora pagó gran parte de estos subsidios del estrato tradicional a través de la inflación de los precios de bienes de consumo popular. En este sentido, la prolongada supervivencia de la pequeña burguesía y el pequeño capital hizo que la exclusión política de la clase trabajadora fuese no sólo posible sino necesaria.

⁸ Cf. Cohen, "The Political Economy of Gaullism", en Andrews and Hoffman, *The Fifth Republic at Twenty*, cit.

El avance de la izquierda fue en gran medida resultado del total colapso de la unidad de la derecha. Las divisiones en el seno de la derecha reflejaron el impacto de la crisis económica en los diversos componentes de la coalición de la clase dirigente. Los dos requerimientos para el mantenimiento efectivo de la coalición —protección del estrato tradicional y crecimiento económico a través de la expansión de los sectores avanzados— se habían ido haciendo cada vez más incompatibles en el curso de los años setenta. Los aumentos de productividad realizados al trasladar recursos de la agricultura a la industria en los cincuentas y sesentas fueron lo bastante elevados para que los subsidios al estrato tradicional no aminorasen seriamente el proceso de crecimiento. En los setentas, por el contrario, el crecimiento económico requirió trasladar los recursos hacia los sectores industriales, frecuentemente más para evitar pérdidas que para realizar ganancias. La apertura de la economía hizo más difícil la protección contra la competencia extranjera, y las consecuencias inflacionarias de subsidiar empresas no competitivas demostró ser desastrosa para la economía en general.

El programa de recuperación formulado por Raymond Barre, nombrado primer ministro en 1976, se basaba en una decisión calculada de permitir que la crisis forzase una reestructuración de la economía. Combinada con medidas de austeridad deflacionaria, la liberación de los precios serviría para restablecer la estabilidad monetaria y la competitividad internacional presionando a los productores no competitivos. No obstante toda la palabrería sobre "liberalización", sin embargo, el programa de Barre implicaba una reorientación de la política estatal más que una retirada fundamental del intervencionismo estatal. Se dio una prioridad absoluta a los criterios competitivos en la promoción de la industria y se diseñaron intervenciones selectivas para reforzar los incentivos de mercado existentes. Al atenerse al mercado, el gobierno buscaba aliviar su responsabilidad por las industrias declinantes y "despolitizar" el proceso de ajuste industrial.

Semejante programa de recuperación era difícilmente digerible para los partidarios tradicionalistas del régimen, y su total implementación fue pospuesta hasta después de la derrota de la izquierda en las elecciones legislativas de 1978. Incluso entonces, las políticas del gobierno fueron restringidas por el peso de los sectores no competitivos, y se hicieron necesarias nuevas operaciones de rescate para reforzar a segmentos del capital monopolista. Muy significativamente, el Estado sacó de apuros a la industria del acero en 1978, asumiendo la porción principal de su capital. De ahí la broma de que la

"liberalización" al estilo francés consiste en eliminar los controles al precio del pan al tiempo que se nacionaliza la industria del acero. El programa Barre no consiguió sus objetivos, pero demostró ser lo bastante amenazador para socavar el apoyo popular a Giscard. Aunque sin presentar una alternativa coherente, la campaña presidencial de Jacques Chirac como candidato del partido gaullista manejó el temor a la desarticulación de los elementos tradicionales de la coalición de clase dominante, y aprovechó eficazmente su resentimiento contra las políticas que parecían favorecer únicamente a las grandes empresas.

Irónicamente, el régimen gaullista acabó por encontrarse doblemente atrapado. Por una parte, necesitaba liberarse del estrato tradicional, al que había atrapado una vez en un proceso de modernización conservadora, con el fin de trasladar recursos y reestructurar la economía. Por otra, los cambios económicos promovidos por el régimen socavaron la importancia económica y política de un segmento significativo de su coalición básica, que era, una vez más, el estrato tradicional. Todavía en 1954, el 26.7 por ciento de la población económicamente activa seguía ocupada en la agricultura, pero esta cifra había disminuido hasta un 10.8 por ciento para 1976. La urbanización fue acompañada por la expansión de las "nuevas clases medias", consistentes en empleados de oficina así como en lo que aproximadamente podría llamarse el "estrato profesional-directivo".

La radicalización de nuevas categorías de trabajadores en los sesentas se entrecruzó con la erosión de la identidad separada previamente mantenida por los trabajadores católicos. La reorientación política del movimiento sindical católico condujo a la creación de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) en 1964. Menos afectada por la herencia de la división provocada en la clase trabajadora por la guerra fría que otros sindicatos, la CFDT emprendió desde el principio acciones comunes con la CGT. Sin embargo, también creaba dificultades al dominio de esta última organizando nuevas categorías de trabajadores y desarrollando nuevas formas de prácticas sindicales, concentrando sus esfuerzos en las luchas militantes en los centros de trabajo y en demandas "cualitativas". Muy pronto superó la fuerza organizativa de la inquebrantablemente anticomunista Force Ouvrière (FO).^{*} La aparición de este nuevo aliado y al mismo tiempo competidor forzó a la

^{*} La Force Ouvrière la crearon, con el apoyo financiero de la CIA y la AFL-CIO, sindicalistas socialdemócratas que rompieron con la CGT en 1947. Su orientación es muy similar a la de los sindicatos norteamericanos; es contraria a la

CGT a comprometerse en prácticas más agresivas e innovadoras.

La transformación posbélica de la estructura de clases en Francia sirvió así para revitalizar el movimiento sindical y para ampliar la base social de la izquierda. Pero la orientación de izquierda del nuevo estrato medio no es en absoluto universal. Ese estrato proporcionó también la base de apoyo para el reto de Giscard a la hegemonía gaullista sobre la derecha. Giscard llegó a la presidencia como un liberal comprometido con un "cambio gradual sin riesgos", opuesto a los cambios "cataclísmicos" que implicaría una victoria de la izquierda. Prometió acabar con los aspectos autoritarios del régimen gaullista, ampliar las libertades individuales y reducir los antagonismos entre las "dos Francias". A medida que la crisis se profundizaba, el régimen sacrificó este programa de liberalización social y política para perseguir la liberalización económica, y Giscard se encerró en una postura "imperial" similar a la de sus predecesores. El deslizamiento derechista de su presidencia provocó una marcada disminución en el apoyo electoral entre los jóvenes, empleados de oficina y votantes que se identificaban con el centro liberal. Esta vez Mitterrand no sólo ganó; ganó por un margen de más de un millón de votos, un margen dos veces mayor al que representó su derrota en 1974. Los sucesivos resultados de Mitterrand como candidato presidencial de la izquierda indican el constante aumento electoral de la oposición al régimen gaullista : 45.5 por ciento en 1965, 49.2 por ciento en 1974 y 51.8 por ciento en 1981.

Retrospectivamente, parece claro que el fracaso de Giscard fue consecutivo a un error de estrategia política, basado en la errónea creencia de que el resultado de las elecciones legislativas de 1978 indicaba una definitiva derrota de la izquierda.⁹ Las políticas de Giscard abandonaron tanto al estrato tradicional como a las nuevas clases medias. El consiguiente resentimiento debilitó a la coalición de la clase dirigente y creó una nueva apertura para la izquierda.

participación sindical en política y rechaza la idea de la participación sindical en la administración Incluso en sus demandas cuantitativas, la FO es generalmente mucho más moderada que las otras dos confederaciones sindicales.

•El haber rebajado el límite de edad para votar a los dieciocho años, muy poco después de las elecciones presidenciales de 1974, fortaleció considerablemente la base electoral de la izquierda. Según una encuesta, el 57 por ciento de los que votaron por primera vez votaron por Mitterrand en la segunda vuelta en 1981.

9 Cf. Noel-Jean Bergeroux, "A la recherche des causes d'échec de M. Giscard d'Estaing", *Le Monde*, 16 y 17 de julio de 1981.

LA IZQUIERDA EN EL CAMINO HACIA EL PODER

Al igual que la muerte del régimen gaullista, el triunfo de la izquierda contiene su parte de ironía. Una izquierda profundamente desunida triunfó después de fracasar durante más de quince años en crear una amenaza unificada contra el régimen gaullista. Las divisiones dentro de la izquierda tienen una larga historia, y el proceso de unificación puesto en marcha a principios de los sesentas fue conflictivo desde su mismo principio. Los acontecimientos de Francia y Checoslovaquia en 1968 interrumpieron el avance hacia la unidad de la izquierda, y las tensiones entre los socialistas y los comunistas reaparecieron a raíz del fracaso de la elección presidencial en 1974. Las pruebas y tribulaciones de la alianza de la izquierda siguieron muy de cerca al programa electoral, siendo el de la unidad el tema predominante en los periodos preelectorales. Sin embargo, este esquema se resquebrajó cuando las negociaciones para la actualización del Programa Común se interrumpieron en el otoño de 1977. El impasse que siguió fue consolidado por la derrota de la izquierda en las elecciones legislativas de la primavera siguiente. Sólo medio año antes, el triunfo de la izquierda en esas elecciones había parecido seguro.

Debido a que la izquierda podía esperar confiadamente ganar las siguientes elecciones, las negociaciones programáticas entre los partidos de izquierda se hicieron complicadas; al no estar ya exclusivamente concentradas en una plataforma electoral, las negociaciones abarcaban las políticas de un gobierno futuro. El Programa Común había sido firmado en 1972, mucho antes de que la situación económica empezara a deteriorarse.¹⁰ Si bien socialistas y comunistas concordaban en que la base programática de su alianza necesitaba revisión, sus puntos de vista sobre las implicaciones de la crisis tendían en direcciones opuestas. Para los socialistas, la crisis significaba que un gobierno de izquierda tendría que ser más "realista" y que la finalidad y el ritmo de las reformas tendría que ajustarse a la necesidad de mantener la estabilidad monetaria. Para los comunistas, la crisis significaba que las reformas de largo alcance eran más urgentes que nunca, siendo imposible sin ellas la recuperación. Esta divergencia se centraba principalmente en el número de nacionalizaciones que debería emprender un gobierno de izquierda.

¹⁰ Para un análisis del Programa Común, véase Andrew Feenberg, "Socialism in France? The Common Program and the Future of the French Left", *Socialist Revolution*, n. 19, enero-marzo de 1974, pp. 938.

Sin embargo, las razones para la quiebra de la Unión de la izquierda se hallan en otra parte, y los desacuerdos sobre las nacionalizaciones sirvieron primordialmente como pretexto para el rompimiento. El equilibrio de poder dentro de la izquierda, y el papel que el PCF debería desempeñar en un gobierno de izquierda, representaban los temas subyacentes. Desde su mismo principio, la Unión de la Izquierda beneficiaba a los socialistas más que a los comunistas en términos electorales, y para 1977 el PCF ya no podía pretender ser el principal partido de izquierda. Identificando cualquier avance hacia el socialismo con el fortalecimiento de su propia posición dentro de la izquierda, los comunistas empezaron a temer que podrían quedar atrapados en un gobierno de izquierda que simplemente "administraría la crisis" en provecho del capital. Usando su única carta de triunfo —el hecho de que ningún gobierno de izquierda podría formarse sin su apoyo—, el PCF trató de forzar al PS a comprometerse en una estrategia diferente con el fin de compensar por anticipado el resultado de las próximas elecciones. Esta estratagema falló en el sentido inmediato de que el PS rehusó someterse a las presiones comunistas. También falló a largo plazo, porque condujo a que el PCF fuese considerado como único responsable de la ruptura de la unidad de la izquierda, lo que debilitó aún más su posición respecto del PS.

Tanto los fracasos de la liberalización giscardiana del régimen gaullista, como la incompleta desestalinización del PCF, contribuyeron al ascenso del PS en los setentas. Los socialistas también se beneficiaron del sistema electoral de la Quinta República y de los cambios en la estructura de clases francesa antes discutidos. El papel de Mitterrand como candidato presidencial de la izquierda proporcionó al PS una ventaja sobre el PCF en términos de exposición nacional, mientras que las elecciones de segundo turno han reforzado su posición dominante dentro de la izquierda. La larga tradición socialista de activismo municipal (en oposición al énfasis del PCF en la organización en los centros de trabajo) y su apertura ideológica a cuestiones nuevas, tales como renovación urbana y protección del medio ambiente, les han permitido atraer un apoyo más amplio entre los nuevos estratos medios. Por supuesto, podía esperarse que los socialistas constituirían la punta de lanza de la absorción izquierdista de los votantes tradicionalmente centristas. Más desconcertante aún para el PCF resultaba el hecho de que el PS había ampliado también considerablemente su participación del voto de la clase trabajadora, parcialmente debido al crecimiento de la CFDT.

El PS es básicamente un partido "abarca-todo", y la heterogeneidad de su base social ha sido fuente de

divisiones internas. El partido fue reconstituido en 1971 en torno a tres agrupamientos, que existen todavía como "tendencias" separadas.¹¹ Mitterrand, que previamente no era socialista, asumió el liderazgo y llevó con él al partido a cierto número de elementos de la "izquierda democrática" que surgió en los sesentas. La estrategia de Mitterrand de una alianza con los comunistas fue apoyada por el ala izquierda del antiguo Partido Socialista, un grupo de orientación marxista llamado CERES (Centro de Estudios, Investigación y Educación Socialista), cuyo principal líder es Jean-Pierre Chevènement. El tercer componente del reconstituido partido provino del núcleo del viejo. Dirigido por Gaston Defferre (alcalde de Marsella) y Pierre Mauroy (alcalde de Lille), basa su fuerza en la maquinaria política urbana. Esta tendencia se asemeja sobre todo a la orientación de la socialdemocracia.

Una cuarta tendencia emergió cuando elementos del grupo de nueva izquierda Partido Socialista Unificado (PSU), y más especialmente su líder, Michel Rocard, se unieron al PS después de las elecciones presidenciales de 1974. Esta fusión coincidió con la asimilación por parte del Partido Socialista de la autogestión como rasgo definidor de su concepción del socialismo. La tendencia rocardista combina un enfoque "radical" de la autogestión y un enfoque "realista" del manejo de la economía, oponiéndose a la nacionalización como "fin en sí mismo" por estas dos razones. Sospecha de cualquier alianza con los comunistas y desde el principio abogó por una estrategia autónoma que permitiría al PS desligarse de la Unión de la Izquierda. Esta posición chocaba muy directamente con la del CERES, que ve el desarrollo de una alianza "orgánica" PS-PCF como la clave de la lucha por el socialismo. La integración de Rocard y sus seguidores condujo a la exclusión del CERES de la dirección nacional del PS en 1975.

Estos desarrollos llevaron al PCF a concluir que el PS estaba avanzando hacia la derecha y contribuyeron a la inflexible posición de los comunistas respecto a la actualización del Programa Común. Paradójicamente, la ruptura de la unidad de la izquierda y la derrota electoral de 1978 precipitaron una Lucha a nivel de dirigentes en el seno del PS que sirvió para corregir la inclinación hacia la derecha de años anteriores. La tendencia socialdemócrata se separó en el congreso del PS de

11 De hecho, la reconstitución del Partido Socialista se produjo en dos etapas. El nombre del partido fue cambiado en 1969 (anteriormente se le conocía como SFIO, Sección Francesa de la Internacional Obrera), pero no fue hasta 1971 que adoptó su actual organización y directiva. La mejor fuente en inglés sobre las tensiones entre las tendencias es Patrick McCarthy, *The French Socialists: Present Choices and Past Dilemmas*, Johns Hopkins University, Occasional Paper, Bologna, 1979.

1979. Sin embargo, la tendencia mitterrandista apoyó firmemente a su líder y reintegró al CERES en la mayoría. Esta lucha de dirigentes forzó a Mitterrand y a la mayoría del PS a reafirmar su compromiso con el Programa Común y con la idea, ya que no con la práctica, de la unidad de la izquierda.¹² Sin esta reafirmación, una victoria de la izquierda en 1981 hubiera sido muy improbable, aunque sólo fuese por la necesidad de las eliminaciones en segunda vuelta.

En un análisis final, el PS no tenía ninguna opción real aparte de revivir la alianza electoral de la izquierda, dados los compromisos institucionales y de coalición de la Quinta República. La unidad de la izquierda fue aún más imperativa para el PCF, como parecen confirmar, a su manera, sus virulentos ataques contra el PS tras la ruptura de la Unión de la Izquierda. En efecto, el propósito primordial de esos ataques parece haber sido ocultar la falta de una orientación estratégica del PCF que pudiera restablecer la unidad de la izquierda en términos más satisfactorios. Esto resultó sumamente claro en el 23 congreso del PCF en 1979, que adoptó una resolución totalmente inconsistente, destinada a preservar la unidad del partido mediante equívocos. Aunque reafirmando las decisiones del 22 congreso, celebrado en lo más álgido de la "eurocomunización" del PCF, la resolución caracterizaba al PS como inherentemente "colaboracionista de clase" y enfatizaba la necesidad de construir la fuerza del partido haciendo campaña por la "unidad desde abajo". Georges Marchais, secretario general desde 1972, concedió así un gran campo programático a sus críticos de línea dura dentro de la directiva, quienes siempre habían desconfiado de la Unión de la Izquierda. Al mismo tiempo, Marchais eliminaba a su principal rival de línea dura del secretariado del partido y consolidaba su control del aparato del partido.¹³

La constante inmovilidad en la dirección del PCF impidió el desarrollo de nuevas prácticas organizativas que pudieran responder a la cambiante naturaleza del movimiento comunista. En contraste con lo que sucedía en el periodo de la guerra fría, los cuadros y el electorado comunista ya no están aislados del resto de la sociedad. La nueva retórica del partido de democratizar la sociedad ha despertado expectativas de democratización interna. Desde la ruptura de la unidad de la izquierda, la respuesta del PCF a las disidencias se ha ido haciendo cada vez más represiva. Los líderes

¹² Este compromiso se reafirma en la declaración programática comisionada por el Congreso de 1979, el *Projet socialiste*, Club Socialiste du Livre, París, 1980, que afirma ya desde su primer párrafo que es una clarificación y ampliación más que una sustitución del Programa Común

¹³ Véase Jane Jenson y George Ross: "Strategies in Conflict: The Twenty-third Congress of the French Communist Party", *Socialist Review*, n. 47, septiembre-octubre de 1979, pp. 71-99; y Ross and Jenson, "Conflicting Currents in the PCF", en Ralph Miliband and John Saville, comps. *The Socialist Register 1979*, Merlin Press, Londres, 1979, pp. 139-71.

eurocomunistas de la federación de París fueron despojados de todas sus funciones oficiales en 1979, y posteriormente muchos eurocomunistas y disidentes de izquierda han sido expulsados por romper la disciplina del partido. Esta retirada fue acompañada de un estrecho aislamiento con la directiva soviética en cuestiones de política exterior, tales como Afganistán y Polonia, y una afirmación generalmente más positiva de los países de socialismo estatal que a mediados de los setentas. Quizá aún más desconcertante resulta el que las organizaciones de partido locales en el "cinturón rojo" suburbano de París han utilizado los ataques contra los inmigrantes como medio para movilizar su base de apoyo.

Todos estos factores contribuyeron a la "derrota histórica" del PCF en las elecciones de 1981. Marchais pagó un alto precio por su campaña sectaria, dirigida contra Mitterrand tanto como contra Giscard, y recibió sólo el 15.4 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Este resultado representa la mayor baja del apoyo electoral que el PCF haya experimentado nunca (comparada con el 20.6 por ciento en las elecciones legislativas de 1978 o el 20.5 por ciento en las elecciones de 1979 para el Parlamento Europeo), así como la votación más baja que haya recibido en cualquier elección de la posguerra. La directiva comunista trató de explicar este retroceso argumentando que muchos votantes comunistas votaron por Mitterrand para asegurar que un candidato de izquierda quedase mejor colocado para la segunda vuelta. Sin embargo, el voto en contra de Marchais y a favor de Mitterrand parece haber sido el único medio a disposición de los comunistas para expresar su oposición a la Línea del partido. Las elecciones legislativas de junio confirmaron la contracción del electorado comunista, pues el PCF recibió un número de votos sólo ligeramente mayor (16.2 por ciento) en la primera vuelta.

El entusiasmo con que la victoria de Mitterrand fue recibida y la consistencia con que los votantes comunistas y de extrema izquierda lo apoyaron en la segunda votación indican la fuerza de atracción que el tema de la unidad de la izquierda sigue teniendo entre los militantes sindicales y partidarios de cualquier tendencia. La unidad de la izquierda no sólo representa una cuestión de relaciones entre los dos principales partidos de izquierda. La unidad, a nivel de partido, siempre ha dependido de la movilización popular. La desunión desde 1978 ha sido mantenida por la desmovilización de la clase trabajadora, engendrada por la prolongada crisis económica. Al tiempo que permitía que las fuerzas del mercado exprimieran a las empresas no competitivas y al estrato tradicional, el programa de

recuperación del gobierno Barre representaba un ataque directo contra los trabajadores y, de hecho, contra todos los asalariados. Este ataque tenía dos frentes. Primero, el gobierno trataba de aminorar la inflación y restablecer los márgenes de ganancia manteniendo los aumentos salariales consistentemente por debajo de los aumentos de precios, atando la ayuda gubernamental y los contratos públicos a la firmeza empresarial para resistir las demandas salariales. En segundo lugar, los esfuerzos del gobierno por estimular los aumentos de productividad se basaban en disminuir el empleo, lo que a su vez contribuyó a la presión hacia abajo sobre los salarios. La tasa de desempleo era de 2.3% (389 300 desempleados) cuando Giscard asumió la presidencia en mayo de 1974, y se había elevado a 7.3% (1 680 300) para enero de 1981. Entre tanto, la expansión de la fuerza de trabajo iba decreciendo, y los ajustes de personal han contribuido a aumentar aún más el número de desempleados en el periodo reciente.

La elevación del desempleo ha erosionado la ya precaria posición en el mercado de la clase trabajadora organizada, y la amenaza de ajustes de personal ha desalentado las luchas militantes de fábrica. Agudamente conscientes de su debilidad, tanto la CGT como la CFDT respondieron a la crisis concentrando sus energías en movilizar el apoyo para un avance electoral de la izquierda, el cual hasta 1978 parecía tan cercano. Esta orientación política contribuyó a la declinación de la militancia de fábrica e hizo a la unidad sindical dependiente del éxito de la Unión de la Izquierda. El colapso de la unidad de la izquierda desmoralizó a los dos sindicatos y las dos principales confederaciones posteriormente se han alejado más que nunca desde los sesentas. Mientras que la CGT se alineaba junto al PCF, la CFDT abandonó la política partidaria activa y retrocedió a una posición de énfasis en las luchas locales y en las negociaciones colectivas. No obstante, la actividad huelguística ha disminuido y, según informes, la afiliación sindical se ha reducido drásticamente a partir de 1978.¹⁴

Mientras los sindicatos peleaban una batalla perdida, la lucha para redistribuir la carga de la crisis

¹⁴ Las cifras de afiliación sindical son notoriamente inverosímiles. Un informe (*L'Express*, 11-17 de mayo de 1981) estima que la CGT perdió un cincuenta por ciento de sus miembros en los últimos tres años, pero esta cifra no ha sido confirmada por otros documentos y probablemente es una exageración. El número de días laborables perdidos debido a acciones huelguísticas disminuyó en un 52.4% de 1979 a 1980, según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo. Sobre la respuesta de los sindicatos a la crisis, véase George Ross, "French Trade Unions and the Contemporary Crisis", en Stephen Cohen and Peter Gourevitch, comps., *France in a Trouble World Economy*, Butterworth, Londres, de próxima publicación.

permanecía centrada en la liza electoral. La crisis y la ofensiva del gobierno contra la clase trabajadora contribuían a la fragmentación del movimiento obrero, pero también disciplinaban al electorado de izquierda e impulsaban a las nuevas categorías de asalariados a oponerse al régimen gaullista. La necesidad de cambio difícilmente habría podido ser sentida con mayor fuerza, y los pobres resultados de Marchais en la primera vuelta desviaron la propaganda anticomunista de la derecha. El PCF tenía pocas opciones aparte de apoyar a Mitterrand en la segunda votación y Marchais orquestó una más de las vueltas en U que tan famoso han hecho al PCF en años recientes. Todos los ataques comunistas contra el PS cesaron tras la victoria de Mitterrand, y Marchais anunció que su partido estaba preparado para asumir todas sus responsabilidades como miembro de la nueva mayoría presidencial. Por lo que toca a las diferencias programáticas que separan al PCF del PS, Marchais concedió que los votantes, al menos por el momento, habían decidido la cuestión a favor de los socialistas.¹⁵

Después de la derrota electoral de Marchais, la máxima preocupación del PCF consistía en recuperar sus pérdidas electorales en la elección legislativa con el fin de mejorar su capacidad de negociación frente al PS. Con este objetivo en mente, el PCF buscó un acuerdo político con los socialistas que le permitiese hacer campaña como partido de la nueva mayoría. Los comunistas propusieron también que los candidatos de los partidos de izquierda pudieran presentarse como candidatos de una izquierda unificada en la primera vuelta. Los dos partidos firmaron un convenio político que despejaba el camino para las eliminaciones de la segunda votación. El PS rechazó la propuesta comunista referente a los candidatos, porque se proponía obtener ventajas masivas como resultado del momentum creado por el triunfo de Mitterrand y la asimétrica disposición de los escaños parlamentarios inherente al sistema electoral. Con un 37.5 por ciento del voto popular en la primera votación, los socialistas ganaron 269 asientos en la nueva Asamblea Nacional, un incremento de 162 escaños y una confortable mayoría propia, mientras que la representación parlamentaria del PCF se redujo de 86 a 44 escaños. Además, el Movimiento de Radicales de Izquierda (MRG), antiguo aliado del PS, ganó catorce asientos, y otros seis diputados se afiliaron a la nueva mayoría.

El resultado de las elecciones legislativas colocó al PS en una posición formidable para negociar

15 Cf. Georges Marchais, "La Gauche a besoin de tous ses atouts", en *Le Monde, Documents et Dossiers: Les Elections législatives de juin 1981*, junio de 1981, pp. 53-54, y las citas de su informe a la reunión del Comité Central de 25-26 de junio en *Le Monde*, 28-29 de junio de 1981.

los términos de la participación comunista en el gobierno. Inmediatamente después del triunfo de Mitterrand, los comunistas exigieron estar representados en cualquier futuro gobierno de la izquierda. Sin embargo, no se opusieron a la formación del gobierno interino decidido por Mitterrand el 22 de mayo, del cual estaban excluidos los comunistas. De hecho, Marchais aplaudió las medidas sociales tomadas por este gobierno. Si bien parece que algunos líderes comunistas se opusieron a la participación en el gobierno, la línea de Marchais prevaleció una vez más. Los comunistas confiaban en que la participación les daría una nueva legitimidad y mantendría las posiciones de poder municipal alcanzadas gracias a las listas de la izquierda unificada en 1977. Tales posiciones proporcionaron importantes recursos organizativos, y el PCF no podía permitirse tener pérdidas en las siguientes elecciones municipales similares a las sufridas a nivel nacional en 1981. Por otra parte, los socialistas querían la participación comunista con objeto de evitar la amenaza de la izquierda, para conseguir la cooperación de la CGT y para legitimar el gobierno basado en la unidad de la izquierda. El gobierno necesita esta legitimación para implementar tanto su programa de recuperación económica como sus principales reformas estructurales.

El acuerdo del 22 de junio, que abrió la puerta para la entrada del PCF en el gobierno, compromete a los comunistas a apoyar las "nuevas políticas elegidas por las mujeres y los hombres franceses al elegir a François Mitterrand para la Presidencia de la República" en todos los niveles de la vida política —el gobierno nacional, el parlamento, y los gobiernos locales— y también en la fábrica.¹⁶ En otras palabras, el programa de reformas del nuevo gobierno es idéntico a la plataforma presidencial de Mitterrand y la "solidaridad gubernamental" abarca las actividades de la CGT. El PCF también hizo concesiones en numerosas cuestiones de política exterior: el desarme europeo, la CEE, Afganistán, los acuerdos de Campo David y Polonia son todos temas mencionados en el acuerdo PS- PCF. En retrospectiva, es indudable que los comunistas lamentan no haberse planteado un programa de nacionalizaciones menos ambicioso en 1977.

Como en el gobierno interino, Mauroy encabeza el gobierno nombrado el 23 de junio. El entendimiento alcanzado entre el presidente y el primer ministro ha venido definiendo hasta la fecha la orientación general. La mayoría de los ministros socialistas están asociados bien sea con la tendencia

¹⁶ *Le Monde*, 25 de junio de 1981. El informe más detallado de las negociaciones previas al acuerdo se encuentra en *Le Nouvel Observateur*, 29 de junio-5 de julio de 1981.

mitterrandista o con la socialdemócrata del PS. Esta nueva alianza margina a los dos "extremos" del partido, al menos en lo que respecta a la composición del gobierno. Rocard fue nombrado Ministro de Planeación, el cual posee considerable importancia potencial, pero sus seguidores fueron casi totalmente excluidos de puestos ministeriales. El CERES corrió con más suerte y puede ahora contar con dos importantes ministerios (Solidaridad Nacional y Tecnología e Investigación) en sus filas. El PCF recibió cuatro ministerios, el más importante de los cuales es el Ministerio de Transportes, dirigido por Charles Fiterman, mano derecha de Marchais. Quizá el aspecto más significativo de la composición gubernamental se encuentra en la orientación moderada de los cuatro ministerios económicos clave. El crucial Ministerio de Economía y Finanzas es dirigido por Jacques Delors, antiguo consejero económico en el régimen gaullista que no se unió al PS sino hasta 1974; el Ministerio de Comercio Exterior por Michel Jovert, líder de un pequeño grupo de la izquierda gaullista; el Ministerio de Industria por Pierre Dreyfus, antiguo gerente de la Renault; y el Ministerio de Planeación por Michel Rocard.

No debemos esperar que el actual gobierno permanezca intacto por mucho tiempo. Hay diferencias muy básicas que separan claramente a las diversas fuerzas políticas representadas en el gobierno, y es probable que las presiones externas acentúen esas diferencias en los próximos años. Especularemos sobre la evolución del equilibrio de fuerzas en la coalición gubernamental en la sección de conclusiones. Baste aquí señalar que, por el momento, Mitterrand y Mauroy parecen controlar firmemente la situación.

El programa del nuevo gobierno

Los socialistas comenzaron su actuación en el gobierno con un diluvio de medidas sociales, que puso a este gobierno a gran distancia de todos sus predecesores de la Quinta República. Se proclamó inmediatamente una amnistía masiva, que tuvo como resultado la liberación de unos 6 235 presos (un séptimo de la población penal) convictos de crímenes civiles no violentos relacionados con leyes de inmigración, seguridad y propiedad. El salario mínimo se elevó en un 10%, las prestaciones familiares y de alojamiento en un 25% cada una y las pensiones mínimas de vejez y enfermedad en un 20%. El gobierno anunció que pagaría por estas medidas en parte mediante un nuevo impuesto sobre las fortunas e impuestos especiales sobre artículos de lujo. También prometió una revisión de todo el

sistema fiscal, que es sumamente regresivo en virtud de su gran dependencia respecto de los impuestos indirectos y las evasiones considerables que permite a los propietarios. Los procedimientos de extradición contra inmigrantes ilegales fueron suspendidos con el fin de regularizar su status. Si bien el gobierno ha impuesto estrictos controles a la inmigración, se ha comprometido a la codificación y ampliación de los derechos de los trabajadores inmigrantes, y ha anunciado que los inmigrantes podrán votar en las elecciones municipales. En forma similar, el gobierno afirmó inmediatamente que impondrá el cumplimiento de las leyes sobre el aborto y el control de la natalidad (liberales) existentes, y que propondría una legislación contra la discriminación sexual.

El espíritu de estas medidas se encarna en la creación de un nuevo Ministerio de Solidaridad Nacional, encabezado por una mujer, Nicole Questiaux. Responsable de las políticas sociales previamente repartidas entre varios ministerios, este nuevo ministerio encabezará la ofensiva contra la desigualdad y promoverá una nueva concepción del bienestar social, estimulando a la gente a "hacerse cargo de sus propias vidas". En particular, los derechos de los derechohabientes de la seguridad social están democratizados a través de consultas y representación formal en consejos locales. Tal como la concibe el nuevo gobierno, la solidaridad nacional está casi estrechamente relacionada con la autogestión.¹⁷

El concepto de autogestión simboliza la visión del Partido Socialista de una "tercera vía" al socialismo, una vía que evita la opresiva centralización del leninismo y los compromisos de la socialdemocracia. El concepto ha asumido una importante función organizativa como "pegamento" ideológico que une a las diversas tendencias del PS, lo que explica gran parte de su ambigüedad. Dentro del PS coexisten concepciones de la autogestión muy diferentes, reflejada cada una de ellas en el programa de reformas del nuevo gobierno. Las tendencias mitterrandista y socialdemócrata perciben la autogestión en términos primordialmente políticos, como una afirmación republicana de libertades individuales y libertad de asociación frente al Estado francés. Rocard y sus seguidores ven la autogestión como un proceso de democracia participativa dentro de las limitaciones de una economía de mercado. Para el CERES, por el contrario, la autogestión representa el control de los trabajadores, e implica tanto un giro radical del poder en la fábrica como una transferencia de la propiedad de los medios de producción.

17 Véase la entrevista con Nicole Questiaux, ministra de Solidaridad Nacional, en *Les Elections législatives*, cit., p. 44.

Si bien la autogestión representa la característica representativa de la visión socialista, esta visión incluye también una fuerte disposición hacia la planeación. Las diferencias entre los socialistas con respecto a la autogestión corren parejas con sus diferencias en sus concepciones de la planeación. La división básica separa aquí a aquellos que conciben la planeación en términos voluntaristas, como medio de resolver las "descolocaciones" de los recursos en el mercado, y aquellos que conciben la planeación como un sustituto para los mecanismos del mercado. La mayor parte de los socialistas están a caballo entre estas concepciones opuestas, representadas en su forma "pura" por Rocard y el CERES respectivamente. En ambas concepciones, una tensión fundamental permanece entre la autogestión y la planeación como los dos pilares del socialismo.

Los temas de autogestión y planeación expresan el interés del gobierno por alterar las relaciones de poder entre los grupos sociales y por trascender la irracionalidad del capitalismo. El tema de la solidaridad general expresa su empeño por mejorar la suerte de los más afectados por la crisis económica y por defender más en general la causa de los menos privilegiados. El gobierno reconoce plenamente que el éxito de estos objetivos reformistas a largo plazo depende de otra preocupación más inmediata: la necesidad, primero, de evitar un mayor deterioro de la situación económica y, enseguida, de hallar un camino hacia la recuperación. La Lucha contra la desigualdad social es observable, por lo menos, en estas tres áreas de la acción gubernamental, y difícilmente puede ser evaluada en esta fase temprana. Por consiguiente, nuestra discusión enfocará las reformas propuestas por el gobierno que afectan las relaciones de poder entre los grupos sociales, así como el programa de recuperación del gobierno.

Reformas estructurales

Empeñados en una estrategia de "cambio en la continuidad", los socialistas y sus aliados (incluyendo al PCF) no pretenden abandonar la Constitución de la Quinta República. No por ello dejarán de hacerse algunas modificaciones constitucionales, y las reformas "estructurales" propuestas por el nuevo gobierno prometen alterar fundamentalmente el carácter del régimen. Tres dimensiones básicas del régimen gaullista serán afectadas por estas reformas. Primero, las estructuras "internas" del Estado serán democratizadas: la descentralización administrativa devolverá el poder a los funcionarios

elegidos localmente, se cambiará el sistema electoral, los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional serán restablecidos y se reformará el poder judicial. Segundo, el papel del Estado en la economía será reforzado a través de la expansión del sector público y la revitalización de la planeación, y las intervenciones estatales recibirán una nueva coherencia así como un propósito público. Finalmente, las relaciones industriales serán reformadas, al trabajo organizado se le dará acceso regular a la toma de decisiones políticas del Estado, y las negociaciones tripartitas sobre cuestiones sociales y económicas serán promovidas por el gobierno.

En el área de las reformas políticas o institucionales, el gobierno ha definido la descentralización como prioridad número uno. La exclusión política de los trabajadores bajo el régimen gaullista estuvo estrechamente vinculada a la centralización administrativa del Estado francés, y los restringidos recursos y poderes del gobierno local sirvieron en los setentas para proteger al régimen contra el control crecientemente extensivo por parte de la izquierda de los representantes gubernamentales elegidos a nivel local. Según los socialistas, la descentralización de la autoridad política es cuestión de "instalar una de las más poderosas palancas para la ruptura con el capitalismo, aquella que permitirá a los ciudadanos asumir el papel más directo en la inmensa empresa de la transformación social".¹⁸

La clave para la centralización administrativa es el sistema de prefecturas establecido por Napoleón. Designado por el Ministerio del Interior, el prefecto de cada departamento (la unidad territorial de administración) controla la distribución de los recursos financieros que los gobiernos locales reciben de París, coordina los servicios estatales y "supervisa" los concejos departamentales y municipales. Aunque los conflictos son generalmente resueltos mediante la negociación, el prefecto tiene la autoridad constitucional para vetar virtualmente toda política que emane de los gobiernos locales. El proyecto legislativo presentado en julio a la Asamblea Nacional por Defferre, el ministro socialista del Interior y Descentralización, rebautiza a los prefectos como "Comisionados de la República" y los despoja de sus funciones políticas. Su papel se reducirá a administrar los servicios estatales locales directamente financiados por París (tales como viviendas, hospitales y carreteras).

El poder ejecutivo a nivel departamental será transferido al presidente del Consejo General, un organismo elegido que previamente tenía pocos poderes. El presidente del Consejo General dirigirá los

¹⁸ Projet socialiste, pp. 552-53.

servicios departamentales, pero no tendrá el poder de veto del prefecto sobre los gobiernos locales. Los concejos y alcaldes municipales tendrán plena autoridad en cuestiones municipales. Si bien es seguro que las prerrogativas de los Consejos Generales serán aumentadas, el papel preciso de estos organismos intermedios tendrá que ser determinado en la legislación que se espera para el otoño. En qué medida se devolverá el poder a los gobiernos locales es algo que depende de la distribución de los ingresos fiscales entre París y las localidades por parte de la Asamblea Nacional.

La oposición alega que la reforma descentralizadora "politizará" la política local, por supuesto, ésta es precisamente su intención. Mientras que el régimen gaullista se beneficiaba de la despolitización de la sociedad civil, la izquierda no será necesariamente fortalecida por las propuestas de Defferre. La descentralización puede socavar la capacidad del gobierno para implementar nuevas políticas. La creación de un sistema enteramente inexperimentado implica ciertos costos de lanzamiento, y es probable que surjan conflictos jurisdiccionales entre los comunistas y los presidentes de concejos. Además, la descentralización puede dar a la oposición importantes bases de poder a nivel local, y una victoria derechista en las elecciones municipales de 1983 podría representar un grave retroceso para el nuevo gobierno. La medida en que la descentralización contribuirá a una progresiva realineación de las fuerzas de clase dependerá de la unidad de la izquierda y de su decisión y capacidad para movilizar el apoyo popular en los próximos años.

El gobierno proyecta otras reformas institucionales equiparables a los cambios en el gobierno local. Los partidos de izquierda llevan largo tiempo empeñados en un retorno a la representación proporcional, esto es, la distribución de los escaños parlamentarios en base a la participación de cada partido en el voto nacional, y tanto Mitterrand como Mauroy han reiterado que el sistema electoral será reformado. El equilibrio de las fuerzas sociales y políticas será representada más exactamente y se dará representación a los pequeños partidos como resultado de los cambios propuestos.¹⁹ Existe una obvia tensión entre los principios de representación proporcional y de responsabilidad electoral. El manejo del equilibrio entre estos dos principios y el momento en que se emitan las leyes electorales serán una

¹⁹ No obstante el hecho de que el Movimiento Ecologista recibió sólo poco más del uno por ciento de los votos en la primera vuelta, sus líderes creen que una representación proporcional hubiera alentado a los electores a votar por ellos, pues hubieran tenido la seguridad de la representación. La representación proporcional, según sus cálculos, hubiera producido hasta 19 escaños en la Asamblea Nacional (*Le Monde*, 4 de julio de 1981).

prueba importante de la medida en que los socialistas cumplirán sus previos compromisos. Después de todo, el Partido Socialista es el que se arriesga a perder más con la representación proporcional, al menos a corto plazo. Si las elecciones de 1981 se hubieran realizado estrictamente sobre esta base, el partido habría recibido solamente unos 180 escaños en la Asamblea Nacional. La representación proporcional fortalecerá la posición del PCF en la coalición gubernamental, y podrá contribuir a intensificar la competencia entre los partidos de izquierda al eliminar la necesidad de alianzas electorales.

La relación entre el parlamento y el ejecutivo es generalmente fluida. Este verano se exhibió una nueva apertura durante la primera sesión de la Asamblea Nacional. Se ofrecieron asientos a la oposición en los comités parlamentarios, oferta que ésta rehusó prontamente. Aún más importante, los ministros se empeñaron en verdaderos debates con los diputados, en vez de la permanente actitud pétrea que caracterizaba al gobierno de Barre. El papel que la Asamblea Nacional desempeñará bajo la presidencia de Mitterrand no será determinado por medios legislativos. Por el contrario, dependerá de la postura adoptada por el Partido Socialista frente al gobierno, y los parlamentarios socialistas declaran, al menos, que no se conformarán con un papel de acólitos. La única muestra de legislación que se espera próximamente en el área de las relaciones parlamentario-ejecutivas concierne al mandato del presidente, que o bien será reducido a cinco años, permitiendo un segundo periodo, o bien será mantenido en siete años pero no será renovable.

Las reformas judiciales propuestas por el nuevo gobierno prometen acabar con el excepcionalismo gaullista y restablecer la justicia según la ley. En palabras de Mitterrand, "la justicia debe ser devuelta al pueblo".²⁰ Junto con la pena de muerte, el Tribunal de Seguridad del Estado será abolido para el próximo otoño. Este tribunal sirvió como mecanismo político de persecución contra los separatistas corsos y bretones, así como contra radicales de izquierda que representaban una "amenaza contra el Estado". De igual manera, la ley de "Seguridad y Libertad" promulgada con Giscard, que permitía procedimientos excepcionales y penas más graves para los crímenes violentos de cualquier tipo, será rescindida, y la independencia de los jueces respecto del ejecutivo será garantizada por una ley cuya promulgación se aguarda para el otoño.

²⁰ *Le Monde*, 27 de junio de 1981.

Mientras que las reformas institucionales pretenden aumentar la participación política y reducir las barreras entre los ciudadanos y la autoridad pública, las reformas económicas estructurales se consideran como mecanismos para aumentar el control público de la autoridad privada. Los nueve grupos industriales mencionados en el Programa Común, así como las restantes firmas privadas en las industrias de armamentos y del acero, deberán ser nacionalizados para el próximo otoño, pero la extensión total sigue siendo incierta, pues aún falta por decidir la cuestión de las subsidiarias.

Según Mauroy, el Estado debe controlar ciertos "polos industriales" con el fin de generar "una política dinámica de inversión y empleo"²¹ La extensión del sector público deberá permitir al Estado reorientar la economía más allá de las ganancias a corto plazo y la inversión especulativa, hacia un "crecimiento más profundo". Al tiempo que atiende necesidades sociales, tales como la creación de empleos y el equilibrio regional, se espera del sector público que también aumente la competitividad de la economía francesa, actuando como "punta de lanza" de toda la actividad industrial. Para permitir que las empresas nacionalizadas compitan en el campo internacional, el gobierno busca preservar la autonomía de la administración, y la Renault es vista como modelo en este sentido. En términos de sus objetivos de transformación, el gobierno percibe la toma descentralizada de decisiones como vital para evitar una versión estatista del capitalismo monopolista y para abrir un espacio para la autogestión. Sin embargo, las estructuras administrativas de la industria nacionalizada no marcarán el comienzo de un experimento radical en la toma de decisiones democráticas. En la medida en que llegue a hacerse realidad, la autogestión será introducida gradualmente mediante prácticas más tradicionales, tales como negociaciones colectivas y representación sindical en organismos que supervisen la administración de las empresas nacionalizadas. Dentro del gobierno coexisten dos diferentes concepciones de la nacionalización. Mientras que el programa socialista trata la extensión del sector público como parte de la ruptura con la explotación capitalista.²² Mauroy y sus ministros de economía tienden a concebir la nacionalización en términos de objetivos de política industrial, especialmente la creación de empresas competitivas internacionalmente. Esta última concepción

²¹ *Le Monde*, 10 de julio de 1981.

²² Cf. *Projet socialiste*, p. 13: "La lucha que estamos librando carecería de sentido si la socialización no fuese liberadora: liberando a los obreros de la explotación a que están sometidos; liberando a los consumidores de las normas y precios que impone la ley de la ganancia; liberando a los poderes públicos de los dictados del gran capital; y, finalmente, liberando al mercado del peso de las empresas que ejercen un monopolio en un sector clave de nuestra economía o que producen bienes indispensables para la vida y la seguridad de nuestro país. El propósito de las nacionalizaciones es responder a estas exigencias".

implica una orientación utilitaria y un grado de flexibilidad en la distribución de los "factores de producción" que parece estar en oposición con los objetivos sociales asignados a las empresas nacionalizadas, y particularmente con la ampliación de la influencia de los trabajadores sobre las decisiones de la gerencia.

La importancia económica de la nacionalización variará de acuerdo a las industrias afectadas. Las nacionalizaciones propuestas abarcan dos sectores muy diferentes. El Estado asumirá el control de toda la industria de telecomunicaciones y porciones significativas de la electrónica para consumidores, electrónica industrial y computadoras. Estas industrias de alta tecnología proporcionan la base principal para la expectativa del gobierno de que la industria nacionalizada impulsará el crecimiento de la economía en general. Aunque dinámicas a nivel mundial, estas industrias han estado estancadas en el contexto francés y el gobierno confía revivirlas incrementando la inversión y eventualmente recombina sus capacidades productivas y tecnológicas. El sector avanzado asumirá una doble orientación de recapturar el mercado francés, penetrado por competidores norteamericanos y japoneses, y competir con las transnacionales en los mercados mundiales. Al igual que anteriores gobiernos franceses, éste cree que sólo las empresas muy grandes pueden verdaderamente competir en el campo internacional.

El Estado tomará también el control de ciertas industrias básicas —acero, químicos y textiles artesanales— que declinaron progresivamente durante los setentas. La nacionalización del acero simplemente formaliza la solución de facto adoptada por el gobierno Barre para hacer frente a las dificultades de esa industria. La prioridad inmediata en este sector consiste en lograr una estabilización en el empleo y la producción, pero el gobierno también prevé una reestructuración industrial que restablecerá la rentabilidad. Estas industrias han tendido a ser poseídas y operadas por familias, y el control público debería ayudar a modernizar estas prácticas comerciales. Por otra parte, el gobierno promoverá las inversiones en nuevas plantas y equipos, así como reducciones de la capacidad excedente, y tratará de facilitar la salida de mano de obra de las industrias básicas.

La extensión del sector público permitirá que la planeación adquiera un nuevo significado. Los socialistas prevén un regreso al tipo de planeación que caracterizó al periodo inmediatamente posbélico. La planeación cumplirá dos funciones básicas. Primero, permitirá la orientación selectiva

de los recursos del Estado hacia industrias estratégicas (públicas y privadas) que servirán como cadena de transmisión del crecimiento de la economía en general. Segundo, la planeación creará, una atmósfera cooperativa general entre los *partners* sociales. Las negociaciones tripartitas a nivel nacional y regional reunirán a los trabajadores, al capital y al Estado por primera vez desde que la CGT se retiró del proceso de planeación a finales de los cuarentas. Reduciendo sus aspectos coercitivos, la democratización de la planeación deberá facilitar la puesta en práctica del Plan. En particular, la planificación regional proporcionará los medios para incluir a las empresas pequeñas y medianas en mayor medida que en el pasado.

Mientras los planificadores del periodo inmediatamente posbélico podían usar los fondos del Plan Marshall para promover el desarrollo económico, el nuevo gobierno tiene a su disposición un sistema financiero dominado por el Estado. El control público de la distribución de los fondos de inversión será fortalecido mediante la nacionalización de los bancos comerciales y de inversión que quedaron en manos privadas después de las nacionalizaciones de 1945-1946. Los únicos bancos no incluidos en la nueva nacionalización son los bancos extranjeros y los cooperativos. Un gran banco nacional de inversión, con un monopolio virtual sobre los créditos a mediano y largo plazo, será creado mediante la fusión de dependencias estatales de crédito ya existentes y bancos de inversión nacionalizados. Bajo la coordinación del Plan, proporcionará intervenciones selectivas con una nueva coherencia.

El Plan tendrá también a su disposición fondos para investigación y desarrollo. Para contrarrestar la disminución de las inversiones del sector privado en la investigación científica como resultado de la crisis, el gobierno proyecta destinar el 2.5% del producto industrial total para este propósito. De esta forma espera mejorar la productividad y distribuir más equitativamente los beneficios de las nuevas tecnologías. En particular, se otorgarán fondos sustanciales para investigación a las empresas pequeñas y medianas, de manera parecida al modelo japonés, con el fin de asegurarles buenas posiciones en la competencia internacional.

La industria nacionalizada estará a la cabeza en la búsqueda de los objetivos de producción, inversión de capital y nuevas investigaciones. El gobierno espera también que la industria

nacionalizada —plaza fuerte tradicional del poder sindical—esté en la vanguardia de los cambios en las relaciones industriales y en las prerrogativas del lugar de trabajo. En este terreno, está siendo considerada una serie de medidas legislativas que fortalecerán la posición de negociación de los trabajadores y promoverán las negociaciones entre patronos y sindicatos tanto a nivel nacional como sectorial. El contenido preciso de estas medidas todavía es incierto, porque el gobierno preferiría legislar en base a acuerdos ya alcanzados entre los *partners* sociales. A este respecto el modelo fue establecido por el acuerdo nacional de reducir la semana laboral a treinta y nueve horas y de introducir una quinta semana de vacaciones, firmado en julio por la principal confederación patronal (CNPF), la CFDT y la FO.* La exacta puesta en práctica de este convenio será determinada, "en principio", mediante negociaciones que se llevarán a cabo en cada industria durante el otoño. Sin embargo, la CGT se negó a firmar, considerando insuficientes las treinta y nueve horas y prefiriendo una acción legislativa que tendría un efecto inmediato y uniforme. Por otra parte, la CGT ha anunciado su buena disposición a continuar negociando a nivel industrial, y el esquema de una decisión negociada de las relaciones industriales parece estar ya afirmado. Otras reformas, tales como la disminución de la edad de jubilación, están siendo manejadas de forma semejante, aunque con diversos grados de participación directa del gobierno.

La dependencia respecto a los acuerdos patrón-sindicato como base para la legislación dependerá en gran medida de la voluntad de las organizaciones empresariales de cooperar con los objetivos de reforma del gobierno. El sistema de relaciones industriales existente puede ser descrito más que nada como feudal, y para el gobierno es imperativo satisfacer las principales demandas de los sindicatos en este campo. Es probable que en la sesión de otoño de la Asamblea Nacional se apruebe un código legal que elaborará los derechos de los trabajadores individuales y de los sindicatos en el puesto de trabajo. Se dará a los trabajadores un mayor acceso a la información de la empresa, y se facilitará la organización sindical. Además, se fortalecerán los canales representativos formales, tales como jefes de planta y comités de empresa. Sin embargo, si bien es posible que se dé a los comités de empresa el poder de suspender los despidos mientras se revisan sus razones, el gobierno se ha esforzado por asegurar a los empresarios que los derechos de los trabajadores no interferirán en las decisiones de la

* Tanto el gobierno como la CGT y la CFDT esperan conseguir una semana laboral de treinta y cinco horas durante los ochentas. Hay que observar, sin embargo, que la semana laboral de cuarenta horas fue legislada en 1936, pero todavía no se ha hecho realidad para la mayoría de los trabajadores. La semana laboral promedio (incluyendo sobretiempos) está más próxima en realidad a las cuarenta y cinco horas.

gerencia. Los mismos sindicatos son contrarios a una versión francesa de la "codeterminación" y prefieren ver una extensión de los temas abarcados por la negociación colectiva. Aunque los patronos no sean forzados por la ley a negociar, muy probablemente el gobierno manipulará los incentivos financieros para estimular prácticas laborales progresistas, invirtiendo así la práctica del gobierno Barre.

El fortalecimiento de la posición de los trabajadores en el puesto de trabajo y a nivel nacional puede representar la más profunda alteración de las relaciones entre fuerzas sociales estimuladas por las políticas del nuevo gobierno. Ya ha surgido una nueva oleada de sindicalización y puede servir para movilizar nuevamente a la clase trabajadora, poniendo en marcha un nuevo ciclo de luchas obreras e impulsando al gobierno hacia reformas más radicales. Por otra parte, los sindicatos pueden ser integrados en acuerdos corporativistas, y la negociación colectiva puede convertirse en un sustituto de la autogestión. Antes de evaluar las perspectivas de la reforma estructural, debemos considerar los esfuerzos inmediatos del gobierno por hacer frente a la crisis económica.

El programa de recuperación

El programa de reformas del gobierno se entrecruza en numerosos puntos con su programa de recuperación. Como ya hemos visto, las reformas económicas estructurales son concebidas como parte del esfuerzo por reestructurar la economía, restablecer la competitividad y generar el crecimiento. Pero sus efectos no serán inmediatos. La reorganización de la industria nacionalizada en los sectores de alta tecnología, por ejemplo, es una propuesta a largo plazo, y la toma de empresas por parte del sector público probablemente dificultará las prácticas administrativas y la productividad durante cierto tiempo. Entre tanto, el gobierno debe alentar el crecimiento y mantener la estabilidad con medios más tradicionales. Un empeoramiento de la situación económica podría socavar gravemente el apoyo popular necesitado para poner en práctica su programa de reformas. Al menos a corto plazo, la recuperación económica depende grandemente de las inversiones privadas. El nuevo gobierno posee ya poderosas palancas para afectar la distribución de inversiones, pero la confianza de los empresarios sigue siendo un determinante crucial del nivel general de la inversión. Los imperativos de la recuperación económica restringen así el ámbito de las reformas estructurales.²³

²³ El problema de la confianza y su relación con las reformas estructurales se plantea en términos teóricos en Fred Block,

El triunfo de la izquierda ha acentuado los masivos problemas económicos heredados del gobierno Barre. Al mismo tiempo, las políticas monetarias de Reagan han contribuido a la desestabilización del franco, forzando al nuevo gobierno a elevar las tasas de interés con el fin de fortalecer la moneda y evitar una fuga masiva de capitales. El precio de las importaciones, especialmente crítico en el caso del petróleo, se ha elevado como resultado del valor decreciente del franco, al tiempo que la inversión se ha reducido a causa de las altas tasas de interés. En los primeros meses del nuevo gobierno se declararon varias bancarrotas debidas a falta de liquidez, y se informa que la inversión del sector privado ha declinado a una tasa anual de casi el veinte por ciento.²⁴ Si bien algunos afirman que el comercio privado está intentando sabotear el programa del nuevo gobierno, en realidad no resulta necesario acudir a una conspiración para explicar la caída de la inversión en el sector privado. Esta caída se puede ver como una respuesta capitalista bastante "natural" a las altas tasas de interés y a la inseguridad de futuros márgenes de ganancia. Como quiera que sea, el desplome de la inversión ha provocado un creciente desempleo. La tasa de desempleo superó la marca del 7.5% muy poco después del triunfo de la izquierda. Al mismo tiempo, la inflación fue estimulada por el aumento de precios de la gasolina y de servicios públicos que se habían aplazado a causa de las elecciones.

La orientación primaria del programa de recuperación del gobierno consiste en la creación de empleo en el contexto de un crecimiento dirigido. Mauroy ha dejado muy claro en diversas ocasiones que el gobierno librará una "guerra contra el desempleo". La reducción de la semana laboral y la disminución de la edad de jubilación ayudarán a mejorar la situación del empleo, pero los efectos totales de estas reformas sociales, tanto como los de las reformas económicas estructurales, aún tardarán algún tiempo en manifestarse. La estrategia inmediata del gobierno es triple, consistiendo en la creación de empleos en el sector público, la estimulación de la demanda e incentivos al sector privado. Para demostrar su interés en combatir el desempleo, el gobierno anunció la creación de 54 mil nuevos puestos en los servicios públicos para 1981, y otros 50 mil para 1982, congelando al mismo tiempo todos los despidos previamente planeados en el sector

"The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State", *Socialist Revolution*, n. 33, mayo-junio de 1977, pp. 6-28.

²⁴ *Le Nouvel Observateur*, 25-31 de julio de 1981.

público. La estimulación de la demanda doméstica está estrechamente vinculada a la lucha contra la desigualdad, en la medida en que el gobierno busca promover el poder de compra de los grupos de bajos ingresos y de los derechohabientes de la seguridad social. Para evitar una espiral inflacionaria, el gobierno considera imperativo asegurar que el incremento del salario mínimo no dispare un movimiento ascendente de toda la estructura salarial. La estimulación "artificial" de la demanda es concebida en términos selectivos, y por esta razón el gobierno concede tanta importancia al tema de la solidaridad nacional.

El empleo en el sector público y la estimulación de la demanda son indicios de las tendencias keynesianas del programa de recuperación del gobierno. En la medida en que el gobierno logre dar un giro a la economía constituirá una importante comprobación de la noción, ya convencional en la actualidad, de que el keynesianismo no funciona. Sin embargo, las medidas keynesianas constituyen sólo uno de los elementos del programa de recuperación, un elemento que no puede dissociarse totalmente de las reformas estructurales destinadas a promover el crecimiento por el "lado de la oferta". Incluso a corto plazo, la guerra del gobierno contra el desempleo implica incentivos para el sector privado. Se otorgarán préstamos a tasas especiales de interés para las inversiones creadoras de empleo y el Ministerio del Trabajo se empeñará en un programa de entrenamiento subsidiado para los jóvenes que entrarán en el mercado de trabajo el próximo otoño. El gobierno ha intentado también contrarrestar los efectos potencialmente dañinos de sus medidas sociales liberando a las empresas pequeñas y medianas de algunos de los incrementos de costos que las medidas sociales llevan consigo (salarios más elevados y contribuciones de los patronos a la seguridad social). En este terreno no sólo está en juego el mantenimiento del empleo en esas empresas, sino también el equilibrio del comercio. En la medida en que el gobierno consiga aumentar el consumo popular a expensas de las industrias que producen para el mercado doméstico, el resultado será un aumento de las importaciones.

La preocupación del gobierno con la balanza comercial está estrechamente relacionada con la necesidad de mantener la estabilidad monetaria al tiempo que se promueve la expansión de la economía. La mayor responsabilidad por la estabilización corresponde a Delors, ministro de economía y finanzas. La prioridad esencial de Delors ha sido la de aminorar el descenso del franco interviniendo en los mercados de divisas. El gobierno hizo un cálculo estratégico de no devaluar la moneda en la

creencia de que la debilidad del franco reflejaba la especulación acerca de las intenciones del gobierno de izquierda y las altas tasas de interés norteamericanas. Durante todo el verano, el gobierno trató de tranquilizar al capital doméstico e internacional• en el sentido de que los compromisos financieros adoptados por el gobierno Barre serían respetados y que la nacionalización sería totalmente compensada. Para mediados de agosto, el valor del franco se estabilizó al menos temporalmente, y la reciente baja del dolar debería aliviar la carga de la política cambiaria.

Con objeto de defender la moneda, el gobierno necesita contener las presiones inflacionarias. Ha solicitado la cooperación sindical para controlar los salarios, un poco de política de ingresos informal y voluntaria, y también ha anunciado su firme intención de mantener los aumentos salariales en el sector público por debajo de la tasa de inflación. (Esta última política será puesta en práctica por un ministro comunista.) El logro principal del gobierno Barre consistió en mantener uno de los déficits presupuestales más bajos en los países capitalistas avanzados, y las reformas del sistema fiscal generarán un mayor ingreso. Por consiguiente, el gobierno disfruta de cierta soltura con respecto al presupuesto. Sin embargo, Mitterrand ha exigido a sus ministros que actúen con "rigor" para mantener el déficit lo más bajo posible, y ha establecido un límite de 90 mil millones de francos.

Finalmente, Delors ha defendido con éxito la continuación de la liberalización de precios como medio para contener la inflación en sectores competitivos. En la medida en que la libre movilidad de los precios forzaría racionalizaciones que, a su vez, resultan en despidos forzosos, esta política parece ir en contra de la guerra de Mauroy contra el desempleo. Las restricciones a la liberalización impuestas por la orientación general del programa de recuperación se echan de ver en los planes del gobierno para intervenir sacando de apuros a la empresa textil de Boussac-Saint-Frères, con veinte mil empleos en juego.

La tensión entre la expansión y la austeridad en el programa de recuperación parece basarse en una divergencia dentro del gobierno que opone a Delors y Mauroy. Delors ha intentado incesantemente fomentar la confianza del comercio y disiente abiertamente de la mayoría del gobierno en la cuestión de compensar a los accionistas de las empresas que serán nacionalizadas. * Presumiblemente tal sería el

* Al parecer, Delors también se opuso a la decisión de permitir la participación de comunistas en el gobierno.

papel que se supone Delors debe representar en el gobierno, y lo que se halla implicado aquí es una "división del trabajo" entre el primer ministro y el ministro de economía y finanzas. La diferencia en orientación política, sin embargo, es real, y la definición precisa de las prioridades del gobierno no quedará totalmente clara hasta que tengan que tomarse opciones críticas.

Los diversos elementos del programa de recuperación están supuestamente coordinados y relacionados con las reformas sociales y económicas en el plan interino de dos años que Rocard presentará a la Asamblea Nacional en diciembre. El proceso de preparación ha sido aligerado con el fin de acelerar la formulación del plan interino, y la participación de los representantes del trabajo y el comercio será mucho más restringida de lo que el gobierno considera debería ser el esquema regular. Si bien la orientación del plan interino mostrará a la luz el equilibrio de fuerzas dentro del gobierno, su puesta en práctica ayudará a determinar el papel futuro de la planificación. Si las políticas a corto plazo difieren del plan, y si no se alcanzan objetivos de éste, la legitimidad de la planificación resultará perjudicada. Esto estimularía un giro en la importancia concedida a la toma de decisiones económicas por el terreno "público" de la planificación en provecho del terreno "privado" de la negociación industrial. La forma como se ponga en práctica el programa de recuperación determinará así en gran medida el carácter de las reformas estructurales.

LAS PERSPECTIVAS DEL SOCIALISMO FRANCÉS

El actual gobierno de izquierda es indudablemente reformista en su enfoque de la transición al socialismo. Pero tanto el objetivo como la coordinación de su programa exceden el patrón tradicional de los partidos obreros que han llegado al poder en Europa occidental. Además, el contexto francés, así como el contexto más amplio de la crisis monetaria del capitalismo avanzado, difieren radicalmente de aquellos en que se iniciaron las experiencias reformistas. El sentido que adoptan las reformas es dado no sólo por las intenciones de quienes las formulan y ejecutan (como podría implicar la discusión de la sección anterior), sino también por las fuerzas sociales que ponen en movimiento. El triunfo electoral de la izquierda no representa una victoria decisiva para el socialismo, pero abre toda una serie de nuevas posibilidades para la acción de la clase trabajadora y

para las políticas radicales. Respecto al curso de la presidencia de Mitterrand es muy poco lo ya asentado firmemente. Cualquier análisis de las perspectivas del socialismo francés debe ser al mismo tiempo especulativo y tentativo. Por consiguiente, en primer lugar definiremos lo que hay de único en la experiencia reformista en curso.

La novedad de la presente situación tal vez se aprecia mejor comparándola con anteriores experiencias reformistas en Francia y con las experiencias de la socialdemocracia en el norte y centro de Europa. Estos parecen ser los puntos de referencia más apropiados, pero su utilidad como analogías históricas resulta bastante limitada. Lo que las experiencias del Frente Popular y los gobiernos inmediatamente posbélicos (1944-1947) tienen en común con el actual es obviamente el problema de la fragmentación de la clase trabajadora en líneas ideológicas y políticas. Esta fragmentación, podría argumentarse, siempre impedirá a la izquierda francesa lograr un control duradero y efectivo del gobierno, condenándola a incursiones reformistas seguidas por derrotas. (Una versión de este argumento estipula que los comunistas son por naturaleza aliados traicioneros.) Pero ni el Frente Popular ni la coalición de la Resistencia fracasaron como resultado de fuerzas centrífugas dentro de la izquierda como tal. Sería más exacto decir que la desintegración de la izquierda fue resultado del fracaso de la experiencia reformista. El Frente Popular se derrumbó debido a crecientes dificultades económicas, y fue abandonado en primer lugar por los Radicales. La guerra fría rompió la coalición de la Resistencia.

El análisis anterior sugiere de forma importante que el gobierno actual se halla en una posición mucho más fuerte que la de anteriores gobiernos de izquierda en Francia por dos razones básicas. Primero, la base social de la izquierda es más amplia y estable debido a la transformación posbélica de la estructura de clases francesa. El electorado de izquierda ha aumentado constantemente desde principios de los años sesenta. La coalición gubernamental incluye al Movimiento de Radicales de Izquierda, que es un partido "burgués", al menos en el sentido de que no es socialista, pero el papel de esta pequeñísima agrupación difícilmente puede compararse con el de los Radicales en el Frente Popular o con los democristianos en la coalición de la Resistencia. La ausencia de un partido significativo que represente los intereses capitalistas dentro de la coalición gobernante distingue también a este gobierno del de los socialdemócratas alemanes, quienes siempre tuvieron que depender del Partido Demócrata Liberal para el crítico margen de votantes que les permite gobernar.

Obviamente, los intereses capitalistas pueden hacerse sentir sin una representación de partido, y el Partido Socialista Francés simplemente ha absorbido en cierta medida a sus antiguos aliados liberales como resultado de la polarización política generada por el régimen gaullista. Los miembros no socialistas del gobierno se encuentran restringidos por el peso organizativo de los partidos de izquierda, pero la necesidad que tiene el gobierno de solicitar la confianza de los empresarios fortalece su posición.

Este gobierno de izquierda está en una posición más fuerte que los anteriores por una segunda razón. El marco institucional de la Quinta República proporciona pocos poderes formales de contrabalanceo al ejercicio de la autoridad gubernamental de una coalición que controla tanto la presidencia como la Asamblea Nacional (donde además cuenta con una mayoría masiva). Los partidos de oposición no pueden poner realmente en peligro al gobierno sino hasta las próximas elecciones legislativas, lo que también diferencia a la experiencia presente de la situación en que se hallan casi todos los gobiernos socialdemócratas. Por otra parte, el actual gobierno de izquierda en Francia puede disponer de un amplio abanico de instrumentos para intervenir en la economía y para influir en la sociedad civil. Si bien el control público de la economía será aún más fortalecido por las reformas económicas estructurales, ya antes señalamos que la descentralización del gobierno y las reformas electorales pueden crear ciertos obstáculos institucionales para los detentadores del poder central. Sin embargo, al aumentar la participación popular, estas reformas pueden fortalecer la posición política de la izquierda.

Estas reformas radicales se enfrentarán también a la resistencia de la burocracia estatal en una forma indirecta y "técnica". La élite burocrática nutrida por el régimen gaullista no puede permanecer indiferente al contenido de las políticas estatales, y está organizada en corporaciones profesionales que sostienen la solidaridad corporativa. Los ataques contra las prerrogativas de los organismos pondrán en peligro la coherencia del Estado y la eficaz operación de sus diversos aparatos, pero el peligro inmediato consiste en que los burócratas socialistas serán "absorbidos" por la corporación. Como en una ocasión señaló Poulantzas, los orígenes educativos y ocupacionales de la dirección socialista (que cuenta en sus filas con muchos que ya son servidores del Estado) convierte al PS en un excelente candidato para sustituir al partido gaullista como partido dominante de masas, integrando y siendo

integrado al Estado.²⁵

Si bien los objetivos más radicales del nuevo gobierno pueden decaer, la experiencia reformista que este gobierno inaugura resultará probablemente más duradera que las anteriores experiencias francesas de este tipo. Así, la socialdemocracia parece ser un punto de referencia más apropiado para una evaluación de la actual situación en Francia. Gran parte de nuestra caracterización del régimen gaullista sugiere que la victoria de la izquierda puede interpretarse como el comienzo de un proceso de "puesta al día" respecto a los países capitalistas avanzados del norte y centro de Europa. El carácter de largo alcance de las reformas propuestas por el gobierno podría considerarse consecuencia del atraso francés, de la mayor distancia a recorrer para llegar a la socialdemocracia, más que a una mayor proximidad del socialismo. Después de todo, muchas de estas reformas son más demócrata-liberales que socialistas en su carácter. El punto clave de la socialdemocratización debería ser el desarrollo de acuerdos corporativistas de negociación tripartita, integrando así a la clase trabajadora organizada al Estado. En otros países, la integración corporativista del trabajo implicó concesiones materiales por parte del capital, y contribuyó de esa manera a la concentración de capital y a la racionalización de la economía capitalista.*

Afirmamos páginas atrás que el régimen gaullista falló principalmente debido a la intensificación de las contradicciones internas de la coalición de la clase dirigente. Los intereses del gran capital y los de los pequeños comerciantes y el estrato tradicional se hicieron cada vez más incompatibles como resultado de la crisis económica. Al contrario de los anteriores gobiernos franceses, el actual se encuentra mucho menos restringido por la necesidad de conservar el apoyo político del pequeño capital y los estratos tradicionales. Por lo tanto puede verse como aportador de las condiciones políticas para la

25 Nicos Poulantzas, *Estado, poder y socialismo*, ed. Siglo XXI, México, 1979. Las profesiones de los miembros del nuevo grupo parlamentario PS-MRG son indicativas del carácter de clase media de los líderes socialistas y de la pertenencia de la inmensa mayoría de ellos al sector público. Cinco categorías profesionales incluyen a casi el 75% del grupo parlamentario: maestros de secundaria (94 diputados), administradores de alto nivel (58), maestros universitarios (25), abogados (16) y médicos (16). Sólo dos diputados se clasifican como "trabajadores" y tres como "empleados". Para un estudio sociológico detallado de los líderes socialistas, véase Paul Bacot, *Les dirigeants du parti socialiste*, Presses Universitaires de Lyon, 1979.

* Esto ha sido, muy obviamente, lo sucedido en Suecia, donde la confederación sindical central (LO) ha desarrollado una "política solidaria", basada en el principio de paga igual para igual trabajo, independientemente de la capacidad de pago del patrón. La consecuencia de esta política, muy conscientemente buscada por la LO, ha sido presionar a las empresas menos eficientes y estimular el movimiento del capital hacia sectores de alta productividad.

formación de una "alianza objetiva" entre el trabajo organizado y el capital monopolista a expensas de los aliados políticos de este último. Las reformas sociales y el programa de recuperación del nuevo gobierno amenazan claramente los márgenes de ganancia del pequeño y mediano capital mucho más que los de los sectores avanzados del capital exportador. Menos motivada por una visión futurista que por el temor a la acción legislativa, la estrategia de acomodo en el terreno de las relaciones industriales adoptada por la principal confederación patronal (CNPF) indica la forma como los intereses capitalistas empujarán al gobierno en la dirección de las soluciones socialdemócratas, aunque sólo sea porque tales soluciones constituyen la "vía de menor resistencia". No es sorprendente que la confederación de pequeños empresarios se haya negado hasta ahora a firmar el convenio nacional sobre la reducción de la semana laboral y la quinta semana de vacaciones, declarando que sus miembros no pueden costear estas medidas.

En este escenario de socialdemocratización existen serios problemas. Como ya antes señalamos, segmentos significativos del capital monopolista están en graves problemas competitivos, y no cabe pensar que los intereses inmediatos del capital monopolista y de la clase trabajadora sean tan fácilmente reconciliables en un periodo de crisis económica. Además, la capacidad del gobierno para presionar al pequeño capital se halla limitada por las prioridades de su programa de recuperación económica. Las empresas medianas y pequeñas se empeñan, típicamente, en la producción de trabajo intensivo para el mercado doméstico, y es preciso darles apoyo si es que el gobierno quiere mantener el nivel de empleo y la balanza comercial.

Más allá de los efectos inmediatos de la crisis, muchos de los rasgos estructurales del movimiento obrero que parecen haber sido cruciales para las experiencias socialdemócratas en otros países, simplemente no existen en Francia. Esto vuelve a plantear el problema de la fragmentación de la clase trabajadora. El problema está históricamente relacionado con la exclusión política del trabajo, pero las divisiones en el movimiento obrero han adoptado una base organizativa que no es probable que desaparezca únicamente porque la izquierda controla el gobierno. Al tiempo que es fuente de debilidad potencial, la fragmentación del movimiento obrero crea también una apertura para la radicalización de la experiencia reformista actualmente en curso. El Partido Socialista difiere de los partidos socialdemócratas en parte por la presencia de un partido comunista bien situado, que constantemente ha impulsado al socialismo hacia la izquierda, incluso cuando los dos partidos han estado en dificultades

uno con otro. Este "impulso" fue reforzado por la naturaleza del régimen gaullista y por la crisis económica, que han tenido el efecto de eliminar la opción centrista para el PS. En marcado contraste con el Partido Laborista británico de los sesentas, por ejemplo, en el curso de los setentas el PS desarrolló una visión genuina de transición socialista. Mitterrand se ve a sí mismo como presidente socialista y la ideología de su partido impone muy definidas restricciones a lo que su gobierno puede llevar a cabo.

La falta de un consenso revisionista se relaciona con otros aspectos que también distinguen al PS de los partidos social-demócratas. Particularmente, el PS carece de los lazos organizativos con el movimiento sindical característicos de la socialdemocracia tradicional. Desde el punto de vista de la lucha por el socialismo, esto tanto puede ser una ventaja como un retroceso. Por una parte, permite al gobierno poner en práctica reformas radicales sin las trabas de una burocracia sindical reformista, y elimina la ° posibilidad del control jerárquico como una alternativa a la participación popular. Por otra parte, la falta socialista de lazos organizativos con el movimiento sindical puede facilitar un deslizamiento del gobierno hacia soluciones liberal-tecnocráticas para la crisis.

El PS es también único en su diversidad interna. El equilibrio de fuerzas en evolución dentro del partido afectará la futura orientación del gobierno y su relación con la mayoría parlamentaria. El triunfo de la izquierda ha consolidado la posición dominante de la tendencia mitterrandista (que manipuló la selección de candidatos para asegurarse el 50% de los escaños parlamentarios en poder del PS) y marginó a los dos extremos del partido. El congreso del PS en octubre será una demostración de unanimidad en torno al programa de gobierno Mitterrand-Mauroy, pero es probable que persistan las diferencias dentro del partido. Rocard está muy desacreditado entre los miembros del partido como resultado de dos errores tácticos: primero, se declaró candidato presidencial, implicando que Mitterrand no podría ganar, y luego se opuso a la idea de llamar a nuevas elecciones legislativas. El CERES también se encuentra en una posición bastante precaria, pues está asociado con la opinión de que la lucha por el socialismo depende del mantenimiento de un aproximado balance entre el PS y el PCF.* Pero el CERES es una tendencia apretadamente organizada, con considerable apoyo entre los militantes del partido, y su posición en el partido podría fortalecerse en caso de surgir conflictos con el gobierno.

* Al cabo del primer turno de las elecciones legislativas, Chevènement propuso que algunos candidatos socialistas que habían pasado a la segunda ronda renunciaran a favor de candidatos comunistas con menos votos a fin de "reequilibrar" a la izquierda. La sugerencia fue muy poco apreciada por el victorioso PS.

El equilibrio de fuerzas dentro del PS depende en gran medida del desarrollo de las relaciones con el PCF. La importancia central del problema de la unidad de la izquierda socava la posibilidad de una socialdemocratización. Si su alianza con los comunistas se rompe, los socialistas enfrentarán considerable oposición dentro del movimiento obrero, mientras que un creciente impulso hacia la unidad podría llevar al gobierno más allá de los límites de la socialdemocracia tradicional. La crisis interna del PCF adquiere una importancia crítica para las perspectivas del socialismo francés en este contexto. Ninguna transición socialista podrá tener lugar en Francia que no implique la activa participación de las fuerzas sociales representadas por el Partido Comunista; sin embargo, el partido parece paralizado por el empate entre las facciones de la directiva y su temor compartido al debate público de las diferencias internas. La nueva situación y las responsabilidades gubernamentales del PCF probablemente fortalecerán a los elementos "eurocomunistas" del estrato directivo, y esto podría conducir a su vez a algunas medidas de democratización interna. Sin embargo, la directiva puede intentar reforzar su control sobre los cuadros en un periodo considerado como una prueba crítica para el partido. En cualquier caso, los comunistas necesitarán bastante tiempo para reagruparse y desarrollar algún tipo de estrategia coherente.

El problema de la unidad de la izquierda afecta directamente a la relación entre el nuevo gobierno y los sindicatos, y es aquí donde los obstáculos a la socialdemocratización que derivan de las características estructurales del movimiento obrero resultan más evidentes. La integración corporativista característica de la socialdemocracia se apoya en la capacidad de las principales organizaciones obreras para negociar en beneficio de los sindicatos que las constituyen y para hacer que los convenios negociados centralmente se apliquen a nivel local.²⁶ El bajo nivel de sindicalización en Francia, la falta de control centralizado sobre los sindicatos locales y la competencia entre las confederaciones nacionales socavan la capacidad de la directiva laboral para representar este papel. Al mismo tiempo, la CGT y la CFDT son muy suspicaces en cuanto se refiere a políticas de ingresos obligatorias y otras formas de integración corporativista en el terreno ideológico.

26 Pontusson, "Apropos Mitterrand", cit.

El gobierno depende en gran medida de la cooperación sindical para contener las presiones inflacionarias estimuladas por su programa de recuperación expansionista. La organización de restricciones salariales sobre una base voluntaria puede ser facilitada por la actual desmovilización de la clase trabajadora, que de le la iniciativa a los líderes de las confederaciones. Hasta el momento, las principales confederaciones han adoptado una postura amistosa frente al gobierno, pero ya hay indicios de que pueden surgir complicaciones en el frente laboral. La CFDT se adelantó a presentar una lista de propuestas de reformas específicas, indicando su disposición a participar en la elaboración del programa del nuevo gobierno. La CGT ha adoptado una actitud más cautelosa, tratando de mantener su independencia respecto del gobierno al mismo tiempo que se presenta como defensora de los intereses de la clase trabajadora. Criticó las propuestas de la CFDT como "minimalistas" y en agosto presentó sus propias demandas al gobierno, incluyendo la reducción de la semana laboral a treinta y ocho horas, un aumento adicional del diez por ciento para el salario mínimo y una suspensión de todos los cierres de fábricas y despidos. Aunque subrayó que estas demandas no equivalían a un ultimátum, el secretario general de la CGT indicó que deberían ser puestas en práctica en el otoño y no descartó acciones de huelga si el gobierno posponía la puesta en marcha de las reformas sociales y las medidas expansionistas.²⁷ La decisión de la CGT de no firmar el convenio con la CNPF sobre la disminución de la semana laboral es indicativa de su actual estrategia de presionar al gobierno para que emprenda acciones de importancia inmediata para los trabajadores. En este esfuerzo, la CGT está actuando parcialmente en nombre del PCF, cuyas manos se encuentran atadas por la "solidaridad gubernamental", pero hay que señalar que el convenio sobre la semana laboral también halló considerable oposición dentro de la CFDT.

Las fuentes de conflicto potencial entre el gobierno y los sindicatos van más allá de las relaciones industriales y del programa de recuperación. Los sindicatos de empleados del Estado afiliados a todas las principales confederaciones han expresado su insatisfacción con la falta de consulta en el proceso de diseño de la reforma descentralizadora del gobierno. Por otra parte, la política de energía nuclear del gobierno ha sido impugnada en términos enérgicos por el secretario general de la CFDT, quien sugirió que este desacuerdo podría extenderse a otras áreas, tales como la política de empleos.²⁸

²⁷ *Le Monde*, 21 de agosto de 1961.

²⁸ Entrevista con Edmond Maire, *Le Nouvel Observateur*, 8-15 de agosto de 1981.

La cuestión nuclear ilustra las contradictorias presiones ejercidas sobre el gobierno desde su base de apoyo popular. Aunque muy crítico del inflexible e irresponsable programa nuclear desarrollado durante la presidencia de Giscard, tendiente a convertir la energía nuclear en fuente del sesenta por ciento de toda la electricidad consumida para 1987, el PS se halla profundamente dividido en cuanto a la cuestión nuclear y ha tratado de evitar cualquier compromiso definitivo. Los socialistas han exigido un amplio "debate democrático" sobre el futuro de la energía nuclear, y buscarán promover medidas de conservación así como el desarrollo de fuentes de energía alternativas. Parecen seguir decididos a un moratorio sobre toda construcción de reactores nucleares. Sin embargo, la decisión, hecha pública por el gobierno el 30 de julio, de suspender la construcción de solamente seis plantas nucleares (tres de las cuales permanecen en etapa de planeación), al tiempo que se prosigue la construcción de una controvertida planta de almacenamiento de uranio, difícilmente puede considerarse una ruptura significativa respecto del programa del gobierno anterior.* La CFDT y el movimiento ecologista recibieron con burlas esta "nueva" política. Al mismo tiempo, la CGT y la FO criticaron el abandono de la industria nuclear y la pérdida de empleos que implicaría, organizando separadamente actos de protesta de los trabajadores que perderían sus empleos como resultado de la decisión del gobierno. De cualquier modo que actúe el gobierno, la energía nuclear puede convertirse en la primera cuestión que lo obligue a enfrentarse a una movilización popular.

La existencia de bases electorales en conflicto proporciona el sustento para las divergentes orientaciones en el nuevo gobierno. No sólo las diferentes fuerzas dentro de éste insisten en diferentes reformas; también perciben las mismas reformas en términos distintos. El caso más obvio en este momento lo constituye el tema de la nacionalización. Como ya antes señalamos, la concepción de empresas nacionalizadas como "campeones nacionales" que compitan en los mercados mundiales choca con la de la nacionalización como medio de liberación social. De igual manera, hemos visto que existe una tensión básica entre expansión y austeridad en el programa de recuperación del gobierno, y la forma como se resuelva esta tensión afectará el significado de las reformas estructurales. Los

* Para situar esta decisión en perspectiva, hay que señalar que son diez las plantas nucleares que operan ya a cierta capacidad (además de la suspendida por el gobierno), que la construcción proseguirá en once plantas (dos suspendidas) y que doce plantas más están en etapa de proyecto (tres suspendidas). El *Projet socialiste* (citado en la nota 11; pp. 203-04) es muy vago en lo que respecta a la cuestión nuclear; prevé un "ligero" aumento en la producción de energía nuclear total durante cierto tiempo después de la instalación de un gobierno de izquierda, seguido por una reducción gradual a medida que se vaya disponiendo de fuentes alternativas de energía.

conflictos por las políticas a seguir dentro del gobierno no serán, obviamente, disputados en el vacío. Su resultado dependerá de las luchas entre las diversas tendencias del movimiento popular centrado en la clase trabajadora así como de las luchas entre el movimiento popular y la coalición de fuerzas conservadoras centradas en el capital, tanto doméstico como internacional.*

Sin embargo, las tensiones y ambigüedades del programa de gobierno no pueden reducirse simplemente a reflejar las conflictivas orientaciones de las fuerzas políticas representadas en el gobierno, como si cada una de éstas encarnase su propio programa coherente. En cierta medida, estas tensiones se reflejan en todas las orientaciones que abarca la coalición gubernamental, y derivan de la crisis económica misma. La crisis parece tener dos implicaciones contradictorias para el reformismo de la clase trabajadora. Por una parte, la crisis impone restricciones al objetivo de las reformas estructurales en virtud de la necesidad de tranquilizar al capital con el fin de mantener el control de la situación económica y estimular la recuperación. Por otra parte, la crisis reduce el margen para el tipo de reformas que podrían servir para integrar a la clase trabajadora sin alterar las relaciones de poder entre los grupos sociales. El actual gobierno se encuentra atrapado en esta contradicción. A medida que la contradicción se desarrolla e intensifica, promete desplazar los conflictos hacia el movimiento popular y poner en primer plano el conflicto central entre trabajo y capital. La movilización de estos dos campos podría empujar al gobierno hacia soluciones más radicales.

Pero éste no es en absoluto un resultado inevitable. Precisamente por las ambigüedades inherentes a

* Aunque el tiempo y el espacio no nos permiten considerarlas aquí, las cuestiones de política exterior tendrán obviamente un impacto considerable en los acontecimientos domésticos. Las restricciones económicas internacionales no deben ser subestimadas. Ya hemos visto el impacto de la política de tasas de interés norteamericana sobre el valor del franco; además, la inversión extranjera en Francia será probablemente afectada por las políticas del gobierno de izquierda. Por otra parte, las decisiones sobre política exterior pueden dividir aún más a las fuerzas domésticas potencialmente divergentes. Por ejemplo, Mitterrand anunció a principios de septiembre que el gobierno proseguiría el desarrollo y expansión de la bomba de neutrones. El PCF ha estado movilizando desde hace tiempo en contra de su utilización por las fuerzas de la NATO. Si bien los comunistas están limitados por su convenio gubernamental, su posición refleja una preocupación popular más vasta a propósito de la militarización de las relaciones Este-Oeste. Aparte de su genuino disgusto con las acciones soviéticas en Europa oriental, Mitterrand parece estar intentando conseguir la aquiescencia norteamericana para su programa de gobierno. Siguiendo esta línea, el gobierno ha apoyado la posición norteamericana en las conversaciones sobre el desarme, argumentando que las negociaciones no deben comenzar sino hasta que Occidente pueda negociar desde una "posición de fuerza". Si esta posición se traduce en un importante programa de rearme para Francia, habrá que hacer "sacrificios" en otros programas gubernamentales. La solidaridad nacional, a este respecto, podría tener diversos significados. Por otra parte, la declaración franco-mexicana que reconoce la legitimidad gubernamental de las fuerzas insurgentes en El Salvador indica la progresista orientación de los socialistas en cuestiones relativas al tercer mundo.

la actual situación, las decisiones tomadas por los actores sociales y políticos adquieren una importancia crítica. El avance hacia el socialismo necesariamente implica realineamientos dentro y entre los partidos de la izquierda, así como en los sindicatos. La situación en Francia es nueva y está abierta a varias posibilidades. Una ruptura progresiva con el capitalismo representa una de esas posibilidades. Si la evolución francesa emprende este camino, el apoyo de las fuerzas de izquierda en otros países capitalistas avanzados puede resultar importante para impedir la reacción apoyada por el extranjero. Por el momento, el triunfo de la izquierda francesa debería ser una fuente de estímulo para nuestros esfuerzos por movilizar las fuerzas populares contra las respuestas autoritarias a la crisis del capitalismo avanzado.

[Tomado de *Socialist Review*, n. 60, Oakland, California, noviembre-diciembre de 1981.
Traducción de Ana María Palos.]